



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE DERECHO

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO

“Vulneración al principio de igualdad de armas entre la Defensa Pública y el Ministerio Público respecto a la prueba pericial en el proceso penal Peruano”

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE

ABOGADO

AUTOR:

Br. José Arturo García Moncada (ORCID: 0000-0002-5404-4880)

ASESORA:

Abg. Angella Inés Pingo More (ORCID: 0000-001-9657-118X)

Abg. Leonel Villalta Urbina (ORCID: 0000-0002-2624-7592)

LIÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Derecho Penal

PIURA – PERÚ

2019

DEDICATORIA

A Dios y a la virgen María Auxiliadora, por encaminarme a
continuar con mis objetivos, dándome perseverancia y entrega,
para lograr cumplir con mis objetivos.

A mis padres, por ser mi inspiración y fuerza, en todas las etapas
de mi vida.

A mi familia por siempre estar presente en todo mi recorrido,
quienes a la vez me dieron aliento para continuar.

A mis amigos e Isabel R., por siempre estar presentes para mí.

José A.

AGRADECIMIENTO

A mis padres, por ser un ejemplo de vida para mí, porque gracias a ustedes estoy donde estoy y no pude desear mejor lugar.

A mi familia, quienes de una forma u otra influenciaron en mi educación, dándome lecciones de vida que no se aprenden en ningún otro lugar, gracias a ellos soy quien soy.

A Isabel R., por ser y seguir siendo más que un apoyo para mí, sin quien no habría logrado alcanzar muchas de mis metas, siempre te estaré eternamente agradecido.

A mis profesores y asesores, quienes han sabido inculcarme no solo conocimientos sino también valores.

A todos los amigos que he ido haciendo durante todo este trayecto profesional, de quienes he aprendido mucho y a quienes llevare siempre en mi mente.

¡Gracias!

José A.

El Jurado en cargo de evaluar la tesis presentada por don **GARCIA MONCADA JOSE ARTURO** cuyo título es: **VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS ENTRE LA DEFENSA PÚBLICA Y EL MINISTERIO PÚBLICO RESPECTO A LA PRUEBA PERICIAL EN EL PROCESO PENAL PERUANO.**

Reunido en fecha, escucho la sustentación y la resolución de preguntas por es estudiante, otorgándole el calificativo de: **11 – ONCE**

Piura, 16 de Setiembre 2019


Abg. Leonel Villalta Urbina
PRESIDENTE
Abg. Angella Inés Pingo More
SECRETARIO
Dr. José Arquímedes Fernández Vásquez
VOCAL

Elaboró	Dirección de Investigación	Revisó	Responsable del SGC	Aprobó	Vicerrectorado de Investigación
---------	----------------------------	--------	---------------------	--------	---------------------------------



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

DECLARATORIA DE AUTORÍA

JOSE ARTURO GARCIA MONCADA, estudiante de la Escuela Académico Profesional de DERECHO, de la Universidad César Vallejo, sede Piura, declaro que el trabajo académico titulado: **"VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS ENTRE LA DEFENSA PÚBLICA Y EL MINISTERIO PÚBLICO RESPECTO A LA PRUEBA PERICIAL EN EL PROCESO PENAL PERUANO"**, presentada en folios 76 para la obtención del título profesional de **ABOGADO**, es de mi autoría.

Por lo tanto, declaro lo siguiente:

- He mencionado todas las fuentes empleadas en el presente trabajo de investigación, identificando correctamente toda la cita textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes de acuerdo con lo establecido por las normas de elaboración de trabajos académicos.
- No he utilizado ninguna otra fuente distinta de aquellas expresamente señaladas en este trabajo.
- Este trabajo de investigación no ha sido previamente presentado completa ni parcialmente para la obtención de otro grado académico o título profesional.
- Soy consciente de que mi trabajo puede ser revisado electrónicamente en búsqueda de plagios.
- De encontrar uso de material intelectual ajeno sin el debido reconocimiento de su fuente o autor, me someto a las sanciones que determinan el procedimiento disciplinario.

Piura 16 de Setiembre 2019

Firma
DNI N° 70001447



INDICE

	Pág.
Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
Acta de aprobación de tesis	iv
Declaratoria de autoría	v
Resumen	viii
Abstract	ix
INTRODUCCIÓN	1
I. Realidad problemática	1
1.1. Trabajos previos	3
1.2.1. Nivel Nacional	3
1.2.2. Nivel Internacional	4
1.2. Teorías relacionadas al tema	5
1.3. Derecho comparado	6
1.3.1. Decreto Legislativo N° 1407	6
1.3.2. Debido Proceso Penal	9
1.3.3. Principio de Igualdad Procesal	10
1.3.4. Principio de Igualdad de Armas	11
1.3.5. Conceptualización y Regulación	11
1.3.5.1. Principio de Inviolabilidad de la Defensa	12
1.3.6. Defensa Pública	13
1.3.7. Ministerio Público	14
1.3.8. El Perito	14
1.3.9. Prueba pericial científico forense	15
1.3.9.1. Orígenes de la prueba pericial científico forense	16
1.3.10. Concepto de prueba pericial	18
1.3.10.1. El dictamen pericial	19
1.3.11. Papel del perito en el proceso penal	20
1.3.12. Naturaleza del perito	21
1.3.13. Clasificación del Peritos	22
1.3.14. Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses	24

1.3.15. Cercanía funcional entre el Ministerio Público y los peritos	24
1.4. Formulación del problema	25
1.5. Justificación del estudio	25
1.6. Hipótesis	26
1.6.1. Objetivos	
1.7. Objetivo General	26
1.7.1. Objetivo Especifico	27
1.7.2. MÉTODO	28
II. Diseño de investigación	28
2.1. Variables, Operacionalización	29
2.2. Variables	29
2.2.1. Operacionalización	28
2.2.2. Población y muestra	28
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad	29
2.4. Técnicas de recolección de datos	30
2.4.1. Instrumentos de recolección de datos	30
2.4.2. Validez y confiabilidad	30
2.4.3. Métodos de análisis de datos	31
2.5. Aspectos éticos	31
2.6. RESULTADOS	32
III. Descripción de las encuestas aplicadas a los especialistas conocedores en el derecho de familia	
3.1. DISCUSION	42
IV. CONCLUSIONES	50
V. RECOMENDACIONES	51
VI. PROPUESTA	52
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	53
VIII. Anexos	55

RESUMEN

La presente investigación titulada “Vulneración al principio de igualdad de armas entre la Defensa Pública y el Ministerio Público respecto a la prueba pericial en el proceso penal Peruano”, se busca evidenciar la importancia de un balance entre las dos principales figuras del proceso penal, la defensa y el Ministerio Público. Ello implica que en todas las fases del proceso, ambas instituciones deben contar con los mismos instrumentos y posibilidades de actuación, con el objetivo primordial de garantizar una defensa integral para el imputado, abalado ello con el 100% de los encuestas quienes refieren que si existe una vulneración a los derechos fundamentales de la parte acusada, durante el procedimiento de la prueba pericial. En tal sentido, el objetivo que persigue la presente investigación es evidenciar la existencia de una vulneración al principio de igualdad de armas entre la defensa pública y Ministerio Público. El diseño de la investigación fue de tipo no experimental, así mismo, se utilizó la técnica de la entrevista, así como la aplicación de encuestas a 5 operadores del derecho conocedores en la materia, para llevar a cabo el proceso de recolección de datos. Del estudio realizado se llegó a la conclusión que existe una evidente vulneración al principio de igualdad de armas entre el Ministerio Público y la Defensa Pública, producto de una mayor facilidad de acceso y cercanía funcional al cuerpo de peritos del Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses por parte del Ministerio Público, además de la inobservancia normativa como funcional, viendo la imperiosa necesidad de consolidar más la normativa nacional en relación al acceso a la prueba pericial y plantear la creación de un órgano autónomo independiente encargado de la realización de la prueba pericial.

Palabras Clave: Principio de igualdad de armas, Ministerio Público, defensa pública, prueba pericial y peritos.

ABSTRAC

The present investigation entitled "Violation of the principle of equality of arms between the Public Defense and the Public Ministry regarding the expert evidence in the Peruvian criminal process", seeks to demonstrate the importance of a balance between the two main figures of the criminal process, the defense and the Public Ministry. This implies that in all phases of the process, both institutions must have the same instruments and possibilities of action, with the primary objective of guaranteeing an integral defense for the accused, with 100% of the surveys indicating that if there is a violation of the fundamental rights of the accused party, during the procedure of the expert evidence, as a result of the violation of the principle of equality of arms. In this regard, the objective pursued by the present investigation is to demonstrate the existence of a violation of the principle of equality of arms between the public defense and Public Prosecutor's Office in carrying out the expert evidence. The research design was non-experimental, and the interview technique was used, as well as the application of surveys to 5 knowledge-based law operators to carry out the data collection process. The study concluded that there is a clear violation of the principle of equality of arms between the Public Ministry and Public Defense, product of greater ease of access and functional proximity to the body of experts of the Department of Legal Medicine and Forensic Sciences by the Public Prosecutor's Office, in addition to the regulatory non-observance as functional, seeing the imperative need to further consolidate the national regulations in relation to access to expert evidence and propose the creation of an independent autonomous body in charge of carrying out the expert evidence.

Key Words: Principle of equality of arms, Public Ministry, public defense, expert evidence, experts.

I. INTRODUCCIÓN

1.1. Realidad problemática.

Se conoce como principio al debido proceso, el cual refiere que una persona cuenta con garantías mínimas para asegurar un resultado justo y equitativo durante la actuación penal, estableciendo un sistema de contrapesos que le da oportunidad al acusado de ser oído y hacer valer sus presunciones frente al juez.

En aras de garantizar el derecho constitucional al debido proceso, es necesario que en la ley y en la práctica, todos los actores involucrados en el proceso penal cuenten con las mismas potestades y prerrogativas, como requisito *sine qua non* para el desarrollo de una defensa justa.

De ahí se deriva la importancia de un balance entre las dos principales figuras del proceso penal: la defensa y el Ministerio Público, por medio del principio de igualdad de armas. Ello implica que en todas las fases del proceso, ambas instituciones deben contar con los mismos instrumentos y posibilidades de actuación, con el objetivo primordial de garantizar una defensa integral para el imputado.

Lo anterior, dejando claro que la presente investigación pretende brindar un enfoque situado desde la perspectiva de la Defensa Pública, esto por ser la institución estatal encargada de ofrecer asistencia técnica gratuita a las personas que no tengan abogado privado, por lo que no se pretende abarcar la defensa particular, aunque diversos aspectos necesariamente deban hacer referencia a esta.

Tal como se buscará evidenciar en el desarrollo de la presente investigación, el Código Procesal Penal le otorga potestades mayores al Ministerio Público en materia de peritajes científico forenses. Lo anterior ocasiona que la defensa se encuentre limitada en cuanto al acceso a una asesoría especializada en materia de peritajes científico.

Sumado a ello, en la práctica judicial se han multiplicado los casos en donde la Defensa Pública se encuentra en una desventaja formal y material para brindar una defensa

técnica oportuna en materia de peritajes científico forenses. Además, existen situaciones en que la Defensa Pública necesita realizar aclaraciones o solicitar contra-peritajes, en donde lo ideal sería que los realice otro experto en la materia.

Es por los motivos esbozados, que la problemática se enfoca en visualizar que en el proceso penal peruano existe un desbalance entre el Ministerio Público y la defensa pública respecto a la prueba pericial científico forense, producto de una mayor facilidad de acceso y cercanía funcional al cuerpo de peritos del Departamento de Medicina Legal y Laboratorio de Ciencias Forenses por parte del Ministerio Público, como además se ha podido corroborar de lo manifestado por defensores públicos, abogados y jueces en la localidad de Piura. Este desbalance que es generado por la misma ley y maximizado en la práctica, produce una afectación al desempeño de la defensa pública a la hora de velar por los derechos constitucionales y procesales de los imputados, lo cual atenta contra el principio de igualdad de armas que debe regir en la práctica de nuestro sistema procesal penal.

Definido el alcance de la presente investigación, es de importancia mostrar la pertinencia de este estudio, desde una perspectiva social y académica. En primer lugar con respecto a la perspectiva social, en el proceso penal peruano es imperante asegurar un equilibrio en el proceder de la defensa pública y el Ministerio Público. El derecho de defensa, dentro del Estado de Derecho Peruano, debe ser fortalecido en todas sus facetas, siendo el principio de igualdad de armas un medio para proteger su vigencia plena. Siendo así, entre más consolidada se encuentre la defensa a la hora de realizar sus labores, logrará mantener un equilibrio de fuerzas frente al actuar del Ministerio Público, así como la asistencia de un servicio público de calidad para los ciudadanos peruanos.

Cabe destacar que no se pretende dar una solución inmediata respecto a la búsqueda de un ideal que debe ir construyéndose con el pasar de los años, enlazado a un derecho y sociedades que permanecen en constante cambio. Sin embargo, este tipo de propuestas, representan ese deseo de fortalecer el sistema procesal enmarcado dentro de ese Estado constitucional de Derecho en el que se vive, por lo que, si bien es correcto tomar la iniciativa con el objetivo de emprender la marcha de ese cambio

positivo, esta es solo parte de una serie de iniciativas que se deben emprender tanto a nivel institucional, legal y sobre todo estatal.

La pertinencia académica tiene su esencia en la investigación; es por ello que dentro de la formación académica, la realización de trabajos que contribuyan con el fortalecimiento de ese cimiento, se convierte en uno de los aportes que se puede brindar como estudiantes y futuros profesionales.

Al haber realizado un estudio referente a la materia Procesal Penal, dentro de la cual se desprenden temas relacionados con los derechos humanos, las ciencias forenses y principios como la igualdad de armas, se determinó que efectivamente existe un desequilibrio de fuerzas entre dos partes muy importantes del proceso penal, como lo son el Ministerio Público y la defensa pública.

1.2. Trabajos previos.

Nivel Nacional

Después de una exhaustiva búsqueda en repositorios nacionales, podemos citar las siguientes investigaciones relacionadas al tema.

De este modo, Delgado Nicolás (2016), mediante la cual se analiza y hace un estudio riguroso del tema denominado “*La Vigencia Efectiva del Principio de Igualdad Procesal y los Derechos del Agraviado*” (tesis para la adquisición del grado de Maestría, para la Universidad Nacional de Trujillo) y de ello es que resulta importante dicho principio pues es necesario mencionar dos aspectos esenciales, como primero el plantear un límite o control para la actuación normativa, administrativa y jurisdiccional de los poderes o entes públicos y como segundo un llamado de atención al estado para que proceda a resolver los obstáculos sociales, políticos, culturales o económicos que restringen la igualdad de oportunidades entre las personas que se desarrollan dentro de una sociedad. Siendo que, de esta óptica procesal, referido principio, garantiza que ambas partes procesales gocen y posean los medios de defensa, ataque y la igualdad de armas para hacer valer a sus medios de prueba y sus alegaciones, ya que la vulneración de estas produce indefensión en las partes.

Nivel Internacional

Aníbal Luengas Gonzales (2017), mediante la cual se analiza y hace un estudio riguroso del tema denominado “*El Principio de igualdad de Armas en el Proceso Penal: Análisis del Rol del Ministerio Público y del Acusador Privado*”, (tesis para la adquisición del grado de Maestría, para la Universidad Libre de Colombia Instituto de Posgrado Maestría en Derecho Penal Bogotá), en el que como una de sus conclusiones manifiesta que:

“La presencia del Ministerio Público, representa en esencia un desbalance en el proceso penal, y con ello una vulneración directa al principio de igualdad de armas, ya que éste a pesar de su calidad de interviniente especial (y no de sujeto procesal), le asisten o se le reconocen facultades en el ámbito probatorio y procedimental, que afectan el equilibrio del proceso, bien sea en favor del acusado o del acusador, dentro de las que se cuentan, la posibilidad de referirse al escrito de acusación, la posibilidad de referirse frente a la imposición de la medida de aseguramiento (cuando a ello hay lugar), la facultad de interrogar en las diligencias de recepción de testimonios, entre otras, enunciadas a lo largo del texto, que indirectamente coadyuvan a una de las partes en su teoría del caso. Si bien es cierto, la protección de las garantías mínimas es necesaria e imprescindible, así como la protección del patrimonio público, dichos intereses pueden verse representados en las figuras tradicionales del esquema acusatorio, es decir el juez, el fiscal y la defensa. Particularmente en el caso del juez, este como representante del Estado en el proceso debe fungir supremo garante tanto de las garantías procesales como de los derechos de las partes y del ordenamiento jurídico. Ahora bien, en el caso del acusador privado, también es claro que existe una vulneración del principio de igualdad de armas. El Derecho Penal como una de las ramas que hace uso de la facultad sancionatoria del Estado, debe encontrarse en cabeza de las autoridades estatales, en atención a las implicaciones que, respecto de los derechos fundamentales, tiene la aplicación de sanciones”. (p. 237)

Se tiene en legislación extranjera que la igualdad de armas dentro del proceso penal respecto a la participación del Ministerio Público y la defensa particular, se ve afectada, toda vez que el Estado otorga mejores prerrogativas y/o condiciones de actuación al Ministerio Público habilitándolo de material varío a efectos que desarrolle una mejor investigación y por lo tanto pueda presentar una mejor teoría del caso sustentado con instrumentos que le permitan afianzar la causa materia de lucha legal.

Situación que no es ajena a nuestra realidad peruano, ya que una situación similar se desarrolla entre el Ministerio Público y la defensa pública, siendo el Estado quien otorga a personas que por limitaciones económicas no pueden contratar los servicios de una defensa particular.

Siendo además determinante el mencionar la tesis de posgrado desarrollada por Mendieta, A. y Jaramillo, J. (2015); titulada: *“La eficacia del principio de igualdad de armas como amparo de los derechos constitucionales de defensa y debido proceso, y su aplicación en el ámbito probatorio del sistema procedimental penal acusatorio en la ciudad de Manizales durante los años 2012 y 2013 ante los jueces de control de garantías”*, (tesis de post grado para la Universidad Libre Seccional Pereira de la Facultad de Derecho), quienes en el Capítulo II de la tesis antes mencionada hacen referencia a “La desigualdad de los recursos de investigación”: teniendo que precisar que dicho Capítulo parte del indicio de que la igualdad de armas, se convierte en la mayoría de los casos en un problema de recursos; esto se centra primordialmente en el capital que se posee para la investigación, que se definen como activos que potencian la capacidad de funcionamiento para obtener y buscar información y las fuentes relacionadas a los cargos penales en contra de la parte acusada, así como también las pruebas suficientes para demostrar su inocencia en juicio.

1.3. Teorías relacionadas al tema.

1.3.1. Derecho Comparado

Costa Rica

El artículo 1 de la Carta Magna coloca a Costa Rica como una República democrática, independiente y libre, fijando una serie de garantías y derechos fundamentales que

integran el Estado Social de Derecho. Esto le impone una serie de obligaciones y límites al Estado en el ejercicio de sus potestades, especialmente en materia penal.

Así, el Estado de Derecho insta el respeto pleno de los derechos de todo imputados, a la luz de las normas constitucionales que lo colocan como sujeto de derecho y no un ente u objeto al arbitrio de los órganos jurisdiccionales. Sobre ello, tiene relevancia lo señalado por:

LLOBET (2005) al comentar el “*artículo 1 del Código Procesal Penal Costarricense*”:

“A todos los imputados deben respetárseles sus derechos, no siendo posible una relativización de los mismos, lo que conlleva a que tenga que garantizarse la presunción de inocencia, el derecho de defensa y que se prohíba todo tipo de coacción tendiente a obtener su confesión. Se debe garantizar el derecho de defensa técnica del imputado y el derecho de abstenerse de declarar, los que tienen una relación entre sí. Por otro lado, tiene relevancia la garantía de derecho de ofrecer pruebas de descargo” (p. 23).

Como conclusión, se entiende que el único modo exitoso de contar con un proceso penal democrático, es la adecuación exacta de este a lo dispuesto en la Ley Fundamental, poniendo en vigencia plena las garantías fundamentales y limitando el poderoso *iuspuniendi* estatal.

Siendo además necesario el mencionar que la Sala Constitucional de Costa Rica ha aplicado de manera tajante lo fijado en la Constitución Política, desarrollando principios generales tales como el principio de defensa, igualdad, legalidad criminal, tipicidad, inocencia, entre otros. Todos estos principios deben aplicarse con el mayor sigilo y exactitud en los procesos de enjuiciamiento penal y en caso de presuntas violaciones puede acudir a la vía constitucional para exigir su restitución.

Colombia

Según el “*Código de Procedimiento Penal Colombiano*” indica cuales son las garantías de una investigación plena, es así que en los artículos 1^{ero} “dignidad humana”, 2^{do} “libertad”, 3^{ro} “prelación de los tratados internacionales” y 4^{to}

“igualdad”. Como también, el artículo 8^{vo} establece: que la igualdad es una derecho primordial de los derechos humanos y reconocido por el “*Comité de Derechos Humanos*” de la ONU como una garantía propia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; por lo que en aras de la igualdad, la generalidad de los sistemas penales están obligados en sus sistemas fundacionales a garantizar y velar por la igualdad de armas, por lo que la doctrina que ha sido desarrollada a lo largo del tiempo ha reafirmado y fortalecido su preeminencia. Por ello la igualdad de armas es un factor indivisible e indispensable de la justicia, para la obtención un juicio contradictorio que vela por la protección de los derechos fundamentales.

México

Según la “*Ley Federal de Defensoría Pública y de Reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación*” en su capítulo VI sobre el Plan Anual de Capacitación y Estimulo en su artículo N° 36 disposición III: Se tiene que México, la reforma constitucional del año 2008 instaló, como herramienta para coordinar y orientar el proceso, la creación del “*Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma Penal*”, con una Secretaría Técnica, responsable de apoyar y coadyuvar a las autoridades locales en este proceso. De forma similar a otras experiencias latinoamericanas, en virtud a la existencia de una doble jurisdicción penal en el país, siendo estas la local y la federal, por lo que la transformación del sistema penal ha seguido una dinámica de exterior a interior, por lo que el liderazgo de los estados ha sido fundamentalmente relevante.

Según los autores Fix-Fierro, H. y Suárez, A. (2015) en “*Hacia una defensa pública de calidad. El nuevo diseño institucional de las defensorías públicas en las entidades federativas de la República mexicana*”, refieren: El nuevo proceso penal debe hacerse mayor hincapié en la inclusión de nuevos medios auxiliares que fortalezcan el servicio de la defensa pública, lo cual se da de manera muy limitada en la legislación nacional, buscando se consolide el principio de igualdad de armas en la generalidad sus fases y durante todas las fases de un proceso; de ello la importancia que significa la inclusión de conocimiento especializado en todo tipo de materias, siendo necesarias para el cumplimiento a cabalidad de los objetivos de la defensoría pública en la estructuración de su teoría del caso.

Argentina

Es de mencionar que según “*El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires*” en su capítulo VIII respecto a las Unidades Funcionales de la Defensa, con respecto a su Artículo N° 98 el cual refiere: Se puede determinar al igual que dicha legislación que es más que necesario, incorporar un inciso o contenido que brinde un mayor entendimiento sobre la actuación pericial que debería ser brindada en beneficio y protección de los derechos fundamentales de en lo general la parte acusada, en los supuestos en los que no posee con los recursos económicos suficientes para solventar una actuación pericial de parte; por ello se propone no solo la implementación de normativa relacionada si no el hecho de que se generen resultados en la práctica diaria.

Chile

Siendo además que en la Legislación Chilena esta actividad probatoria se regula institucionalmente por la ley de la Defensoría N° 19.718, en la letra h) del artículo N° 20: De ellos se puede determinar la importancia de una secuencia funcional con respecto a la permisión de presentar una prueba pericial en la legislación nacional, por lo cual se debe procurar la implementación de una base normativa sólida que abarque todos los supuestos facticos en los cuales se puede ver inmersa la defensa pública, ello en función a dejar que las personas imputadas puedan efectuar de manera eficaz sus derechos; siendo también necesario el satisfacer la garantía constitucional de proceso debido y el derecho a contar con una defensa jurídica adecuada, habrán de medirse en igualdad de condiciones procesales, bajo el principio de “*igualdad de armas*”, que haga real y no exclusivamente declarativas todas las garantías constitucionales implicadas.

Paraguay

Se tiene además que en la normativa Paraguaya en su “*Código Procesal Penal - libro III (Medios de prueba) - Título IV (Pericia)*”, con respecto al Artículo N° 217 “*Orden para la Pericia*”, refiere: Con respecto a la prueba pericial y tomando como punto base esta vez a la defensa, con el objetivo de conocer cuáles son los mecanismos que dicho

cuerpo normativo le impone como parte del proceso para la presentación de la prueba en cuestión; en primer lugar, no se puede pasar por alto el artículo N° 215 del código en cuestión ya que el mismo es el referente al “nombramiento de peritos”, sin embargo, como se mencionó páginas atrás, la defensa se encuentra excluida en cuanto la posibilidad de nombrar y seleccionar peritos durante la etapa preparatoria, contrario a la potestad que si gozan el Ministerio Público y el tribunal competente. Es por ello que la autoridad otorgada a la defensa para acceder a la realización de un peritaje acorde con su elenco probatorio, sería mediante la solicitud al Ministerio Público, o bien, al tribunal competente, pero nunca por cuenta propia, aspecto que genera un desbalance normativo, puesto que la labor de la defensa posee igual importancia que la del Ministerio Público desde la etapa preparatoria, siendo que la misma podría tener la necesidad de nombrar o seleccionar un perito en el mismo supuesto que la fiscalía o el tribunal.

Lo anterior debe analizarse a la luz del principio de igualdad de armas, por lo que es prudente mencionar que dicho principio permite determinar que la defensa tiene igual derecho a ofrecer su propia evidencia en juicio, también posee derecho respecto a que durante el juicio se controvierta la evidencia que ofrece el Ministerio Público.

1.3.2. Decreto Legislativo N° 1407

Siendo este el encargado de fortalecer el servicio de defensa pública gratuita a favor de los usuarios que no poseen recursos económicos y se encuentren en una situación de vulnerabilidad, teniendo como finalidad el efectivizar el derecho de defensa y el acceso a la justicia, proporcionando asistencia técnico legal gratuita o patrocinio.

Es necesario el hace mención que con respecto al deber de colaboración, el Ministerio de Justicia cuenta con la colaboración de la Policía Nacional del Perú, del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Instituto Nacional Penitenciario y las demás instituciones vinculadas al servicio de justicia, ello para el cabal cumplimiento de las funciones del Servicio de defensa pública; siendo ello cuestionable, ya que en la práctica aun la defensa pública se encuentra limitada en la generalidad de casos con respecto al acceso a la prueba, en especial con respecto al acceso a la pericia.

En su artículo N° 5, el cual hace referencia a las funciones del servicio de defensa pública: Es de interés el mencionar que en el inciso b) el cual mencionar “*Brindar asistencia técnico pericial forense y de trabajo social a las/los defensoras/es públicas/os, para el ejercicio de la defensa*” resulta ser insuficiente ya que no brinda o establece una medida específica que otorgue de un cuerpo más amplio de peritos a la defensa pública, con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales de los acusados que estén inmersos en un proceso.

1.3.3. Debido Proceso Penal

La aplicación progresiva de los derechos fundamentales de carácter instrumental o procesal, como una agrupación de medios para asegurar su vigencia y eficacia, configuran el debido proceso.

La Constitución Política del Perú en su artículo N° 139 numeral N° 3, establece:

“Son principios y derechos de la función jurisdiccional (...) La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”. (p. 15)

Por lo que los derechos fundamentales son importantes ya que cuentan con garantías procesales, que admiten efectivizarlos no sólo ante los tribunales, sino también ante la incluso e administración entre las partes. La protección de los derechos fundamentales a través de los procesos, dirige necesariamente a dos aspectos: en primer lugar, que se efectivice el derecho al debido proceso formal y material de los ciudadanos y como segundo, que el Estado reafirme la tutela jurisdiccional de derechos.

De igual forma el Código Procesal Penal Peruano (Decreto Legislativo N° 957) en el Capítulo II “*El Abogado Defensor*” Artículo N° 80 “*Derecho a la defensa técnica*” refiere: Tanto las doctrinas y las jurisprudencias nacionales, han definido que el debido proceso es un derecho fundamental y necesario, que posee toda persona sea tanto de nacionalidad extranjera o peruana, jurídica o natural, no siendo solo un principio o derecho de aquellos que ejercen la tarea jurisdiccional. Por lo que en esa medida, el debido proceso tiene un doble carácter de los derechos fundamentales, ya que es un

derecho particular y subjetivo exigible por un sujeto, además se tiene que es un derecho objetivo ya que asume una dimensión institucional, ya que lleva implícitos los fines colectivos y sociales de justicia.

1.3.4. Principio de Igualdad Procesal

Teniendo que en todo proceso se debe garantizar la paridad de oportunidades y condiciones; entre las partes, los abogados, el abogado de oficio el fiscal, en empleo del derecho fundamental a la igualdad ante la Ley, del artículo N°2, inciso N°2 de la Constitución Política del Perú.

El Nuevo Código Procesal Penal de Perú se hace mención en su artículo I del Título Preliminar, sobre la imparcialidad del Juez, y en su inciso N° 3 del mismo artículo se establece “La intervención igualitaria de las partes, debiendo el Juez, preservarla, para lo cual deberá remover todos los obstáculos que lo impidan o dificulten” (p. 86).

Según BÖTTICHER, en su artículo "*La igualdad ante el Juez*", en la "*Revista de Derecho Procesal*" (1955) refiere: El principio de igualdad en la rama procesal no requiere una igualdad aritmética, en cambio exige que se otorgue a las partes una razonable igualdad de posibilidades en el desempeño de su derecho de defensa y de acción. Determinando que la igualdad procesal no recae en desconocer las diferentes posturas las partes durante un proceso, sino en que tengan igualdad de posibilidades de probar lo que se alega e impugna a la contraparte, y que el Juez haga lo necesario para que ambos litigantes tengan esas diferencias posicionales en equilibrio, sin la existencia de privilegios, logrando así la emisión de decisiones imparciales.

1.3.5. Principio de Igualdad de Armas

Para poder analizar los alcances del principio de igualdad de armas en la normativa peruana, es imperante fijar una base constitucional que permita revisar los pilares de este principio en el marco del debido proceso, el derecho de defensa y el Estado Social de Derecho.

Por otro lado, esta definición brinda una amplia importancia sobre la equidad. Por ello, en vez de añadir un significado al concepto o término, los sistemas penales han

suprimido en gran medida de la igualdad su parte sustantiva, variándola a una promesa más genérica y abstracta de justicia. Precisándolo como una característica de un concepto más genérico de juicio. Por todo ello se tiene que la igualdad de armas no es distinta a la simple noción de derecho del debido proceso o al libre albedrío desde una visión teológica.

Por ello para un mejor entendimiento es necesario el citar lo manifestado por la “*Corte Constitucional de Colombia*” en la sentencia C-536 del año 2008, expuesta por el Magistrado Jaime Araujo Rentería: Se determinó que el derecho procesal penal es el un derecho constitucional aplicado. Es de este modo que el proceso penal implica una gama de actos procesales con determinadas formalidades, las que no deben ser vistas como un fin en sí mismas, sino una garantía para los ciudadanos en el cumplimiento de sus derechos.

ESQUEMA PROCESAL



Fuente: Dr. Chero, El Principio de Igualdad de Armas su Trascendencia en el Nuevo Modelo Procesal Penal.

1.3.5.1. Conceptualización y Regulación

Es de mencionar además que el Principio de Igualdad de Armas, que se desprende del Código Procesal Penal garantiza explícitamente este principio como norma rectora del proceso al disponer en el N° 3 del Art. I de Título Preliminar: Siendo de mencionar que si bien no se hace mención de manera tasita del principio de igualdad de armas, si hace referencia a la esencia de tal.

Si bien es cierto según ha sido mencionado por la “*Corte Constitucional de Colombia*” en su sentencia C - 536 del año 2008, por el Magistrado Araujo, P. (2014): Es inusual que no exista una definición uniforme de lo que significa garantizar la igualdad de armas de la parte acusada frente al Ministerio Público; por ello la igualdad de armas ha sido durante un largo tiempo un tema crítico contra el cual el sistema penal combate arduamente con el fin de garantizar y velar por un juicio justo.

A pesar de que no cuenta con una definición precisa de la frase “*igualdad de armas*”, el diccionario jurídico de mayor trascendencia, el “*Black’s Law Dictionary*” de origen Estado unidense define “*igualdad*” como el estado o calidad de ser iguales, así como también una semejanza en el estatus o poder político.

Acotando que el principio de igualdad de armas reacciona a la lógica que ejerce la metodología de investigación de los sistemas penales, en este sentido ambas partes procesales, siendo tanto el Ministerio Público como al imputado o acusado, le es fácil recaudar material probatorio mediante la etapa de investigación.

1.3.6. Principio de Inviolabilidad de la Defensa

Se encuentra consagrados en el art. 139° inc.14 de la constitución del Perú y está formulada en los siguiente : “no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso” (p. 49).

Siendo que toda persona, por el único hecho que se le impute la comisión de una acción u hecho punible, está respaldada por el derecho de defensa en toda su plenitud.

El artículo IX del TP del Código Procesal Penal esta: Esta disposición se inclina a superar las limitaciones al ejercicio del presente derecho en el vigente sistema inquisitivo, del cual no sólo se restringe la defensa, transformándola en un derecho opcional, sino que no se permite su ejercicio por medio del ocultamiento de la información inmersa en el cuaderno o expediente, a la luz de una mal entendida reserva de las diligencias del sumario.

Para potenciar la efectiva vigencia de este derecho, es necesario el garantizar la asistencia de un intérprete o traductor cuando no se entiende el idioma del tribunal, la

libertad que tiene el imputado para decidir si declara o si guarda silencio la información del hecho, la posibilidad real y concreta que pueda comunicarse con su defensor y de contar con el tiempo razonable para preparar su defensa y la posibilidad de recurrir y ofrecer medios probatorios.

1.3.7. Defensa Pública

El análisis del rol de la Defensa Pública en el proceso penal permitirá realizar un estudio a profundidad sobre el posible desbalance con respecto al Ministerio Público. El fundamento legal de esta institución se encuentra en la “*Ley del Servicio de Defensa Pública Ley N° 29360*” dentro de sus tres capítulos, otorgada por El Congreso de la República.

Es de mencionar que la institución ofrece el servicio de Defensa Penal a aquellos a quienes les han iniciado investigaciones, así como también aquellas que ya están siendo sometidas a una investigación fiscal y policial. Además, se ejerce la defensa de los imputados, procesados en salas y juzgados especializados en lo penal, y a los internos reclusos en establecimientos penitenciarios, efectivización de sentencias y rehabilitaciones, gestionando beneficios penitenciarios y solicitando los derechos de gracia.

Si bien se muestra una noción de la labor de esta institución en el proceso penal, es necesario especificar con mayor detalle que su misión esencial constituye brindar una defensa; eficaz, técnica, con calidad y eficiente, con recursos humanos, materiales y tecnológicos idóneos y necesarios para hacer más eficaz el servicio.

1.3.8. Ministerio Público

Por otro lado, el Capítulo I, Artículo N° 61, sobre el Ministerio Público, con respecto a las atribuciones y obligaciones, en el apartado número dos refiere:

“El Fiscal conduce desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función” (p. 78).

Por lo cual esta dirección funcional implica una especie de subordinación por parte de la Policía Nacional a las órdenes del Ministerio Público, mencionada en reiteradas ocasiones en el desarrollo del presente estudio, como parte del análisis del desbalance entre las dos instituciones mencionadas.

1.3.9. El Perito

Según Duce (2015): El perito es un experto porque posee un conocimiento suficiente sobre el área a peritar; frente a ello el perito es toda aquella persona que posee un conocimiento profundo de una ciencia, oficio o arte y la investigación de un hecho delictivo requiere que dichos conocimientos sean aplicados para resolver las interrogantes planteadas en la investigación.

El concepto de perito es conceptualizado por Jouvencel como el experto que aportará sus conocimientos como una herramienta más del proceso penal.

Asimismo, la figura del perito puede fungir mediante la solicitud de una de las partes, aspecto que como su función lo indica, lo convierte en lo que se conoce como perito de parte.

Su fundamento legal se encuentra en el artículo N° 177 del Código Procesal Penal y es delimitado por Flores (2012): Se exige un alto grado de acreditación y conocimiento del perito, por es un tercero imparcial que ingresa a ilustrar a los investigadores del delito y en especial al juez que tiene que emitir un fallo, por ello el juez acude al asesoramiento de un experto cuando se requiera la explicación y mejor comprensión de algún hecho, lo cual necesariamente tiene que ser explicado por un perito que tiene conocimiento especializado de naturaleza científica, por estas consideraciones, el perito es una persona que necesariamente debe ser calificado. En conclusión, el perito es un especialista u sujeto que a menudo es consultado para la resolución de conflictos.

1.3.10. Prueba pericial científico forense

En la presente se analizarán los principales aspectos en torno a la prueba pericial científico forense, por motivo de que la misma se configura como uno de los ejes

centrales a lo largo de la investigación, por lo que es primordial desde un inicio manejar con claridad conceptos y características fundamentales alrededor de ella.

a) Orígenes de la prueba pericial científico forense

Respecto a la prueba pericial en general los romanos la concebían como un medio de asesoramiento científico directo del juez para la emisión del fallo, siendo que en su sentido puramente sustancial, surgió a finales de la Edad Media, a raíz de que las pruebas naturales de los germanos comenzaron a perder prestigio, dando paso a que en el siglo XIII, dichas pericias comenzaran a ganar valor procesal con un esbozo de reglamentación, el cual con el pasar del tiempo se fue ampliando. Posteriormente, la peritación continuó difundiéndose durante el proceso inquisitorio, primeramente en Italia y luego en el resto de Europa, siendo Francia el país donde mediante la Ordenanza de Blois en 1579, se consagró de manera significativa. Sin embargo, se concluye que es con el inicio de la codificación que la pericia como medio de prueba comenzó a tener acogida de manera más formal en los códigos de procedimientos ya que se establecía de manera general en los códigos penales y civiles europeos de los siglos XIX y XX, lo cual fue heredado por los códigos de América Latina.

Si bien es cierto hasta el momento se ha hecho referencia al surgimiento de la prueba pericial en general, es importante ahora, centrar el análisis en la prueba pericial científico forense, misma que es uno de los ejes fundamentales del presente trabajo de investigación, por lo que es necesario hacer mención también, a los antecedentes y posterior surgimiento de esta prueba en particular.

Para ello se debe hablar sobre lo que se conoce como las “*Ciencias Forenses*”, campo de estudio que puede ser definido en dos sentidos según lo referido por COBB, P (1998), uno amplio que la concibe como: “la ciencia utilizada para propósitos de la ley”. (p.125)

Por lo que se puede concluir que cualquier rama de la ciencia usada en la resolución de disputas legales sería parte de la misma. Mientras que en un sentido más restringido, se menciona que: “la especialidad de las Ciencias Forenses es el uso de la ciencia por

parte de la Policía y las Cortes como elemento de prueba en sus investigaciones criminales y para la resolución de este asunto en un juicio subsiguiente” (p. 76).

Respecto a los orígenes de las Ciencias Forenses, se establece un ligamen muy particular con respecto a los avances en el conocimiento de la ciencia y la medicina, cuyo aumento gradual fue permitiendo cada vez más el uso de la evidencia médica en las Cortes, campo que era utilizado y conocido por los chinos desde el siglo VI como medicina legal, siendo que a partir de los siglos XVII y XIX, se fueron incorporando otros tipos de evidencia científica, gracias a los inicios del desarrollo de la química moderna.

Con lo que se puede apreciar una relación de manera mucho más estrecha y significativa entre las Ciencias Forenses y su utilización como prueba importante para la resolución de investigaciones judiciales.

Dicho aspecto fue dando como resultado a que las interrogantes que se planteaban las autoridades dentro de la labor investigativa, considerándola como una valiosa herramienta de apoyo en profesionales de áreas científicas involucradas en el área de la medicina, como en otras distintas, entre las cuales se mencionan: Química, biología, toxicología, física, entre otras.

En la actualidad se cuenta con una gran variedad de ramas científicas, colaborando en la labor judicial de producción, recolección y presentación de prueba pericial científica para la resolución de casos penales.

En la misma línea Midón (2012) menciona que: se puede establecer un ligamen entre la pericia en general y la prueba pericial científico forense, por lo que se puede concebir a la primera como el género y a la segunda como especie, donde esta última a pesar de poseer sus particularidades como lo es el hecho de aportar conocimientos de índole científico y técnico, recibe un tratamiento teórico uniforme respecto a su papel dentro del proceso penal peruana, por lo que al analizar el mismo es posible hablar de la prueba pericial en general, teniendo en cuenta que perfectamente dichos supuestos son aplicables a la prueba pericial científico forense. Por esta razón, es

posible realizar un análisis general de la misma, teniendo siempre en cuenta que implícitamente se está abarcando el tema de fondo de la presente investigación.

b) Concepto de prueba pericial

En primer lugar, se debe tener claro qué se concibe como prueba pericial dentro del sistema procesal penal actual, siendo un medio probatorio con el cual se intenta obtener para el proceso, un dictamen fundado en especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos, útil para el descubrimiento o la valoración de un elemento de prueba, claramente se puede notar como dicha concepción habla de esos conocimientos especiales que se desean aportar al proceso para fundamentar una posterior decisión.

Por otro lado, si se desea concebir la prueba pericial dentro del sistema procesal penal, resulta importante analizarla con base en una de las principales características que identifican dicho proceso, como lo es la oralidad. Por ello, MAIER, al hacer referencia a la prueba bajo análisis menciona que inevitablemente se debe hacer mención de manera anticipada a varias temáticas desarrolladas que con posterioridad en la presente investigación, pero que sin duda no pueden ser pasadas por alto a la hora de abordar conceptualmente la prueba pericial. Con esto se hace referencia al tema del perito como parte esencial de dicha prueba y a su papel dentro del proceso. Tal aclaración es necesaria, puesto que al concebir dicha prueba, se debe especificar la manera en que la misma ingresa o es presentada en el proceso, puesto que tal y como se explicó con anterioridad, dentro del procedimiento penal la prueba debe ser incorporada y recibida cumpliendo los principios de oralidad, inmediación, publicidad, entre otros.

Lo anterior es abordado correctamente por Fernández (2002) al exponer que la prueba pericial propiamente dicha, puede entenderse “[...] como la actividad probatoria regulada legalmente, a través de la cual los peritos transmiten al órgano jurisdiccional sus percepciones, opiniones o deducciones basadas en los principios o reglas que rigen la ciencia, arte, profesión y oficio que desempeñan, con respeto de las garantías y principios procesales de imparcialidad judicial, contradicción, inmediación, publicidad, etc”. (p.129). Se observa como empieza a incorporarse dentro de dicho concepto el hecho de que la prueba pericial debe darse a conocer

dentro del proceso mediante la comparecencia del perito al juicio oral, con base en los principios mencionados.

Lo cual deja en evidencia el mensaje que se desea transmitir respecto a la prueba pericial dentro del proceso penal, pero que a la vez plantea una discusión relativa a esa posible necesidad de que el perito se haga presente en el proceso oral para que la prueba pericial sea admitida y de manera válida conforme a nuestra legislación procesal penal, la cual será abordada más adelante.

1.3.11. El dictamen pericial

Es definido por Burgos como: “el acto por el cual se culmina el desarrollo de la labor pericial y consiste en la respuesta fundada a las cuestiones oportunamente fijadas por las partes” (p. 65).

Además, según DE SANTO (1995) en su artículo “La prueba pericial” refiere:

“este dictamen debe ser un acto procesal, debe ser el resultado de un encargo judicial, debe ser personal, debe versar sobre hechos y debe ser obra de un tercero”. (p.59)

Lo anterior convierte a este tipo de acto como indispensable dentro de la labor efectuada por los encargados de incorporarlo al proceso, así como el control jurisdiccional para la aceptación de este como tal.

Ahora bien, además es necesario el también hacer mención de algunos elementos teóricos generales que delimitan la investigación, generando una breve reseña de lo desarrollado por la doctrina especializada en las temáticas principales: el principio de igualdad de armas, el Ministerio Público, la Defensa Pública, peritajes científico forenses y la figura del consultor técnico.

Sobre el principio de igualdad de armas, LLOBET (2012) en su quinta edición del “*Código Procesal Penal Comentado*” presenta distintos contextos en donde se visualiza un desequilibrio entre la Defensa Pública y el Ministerio Público. Referente a los peritajes, expone el desbalance entre la Defensa Pública y el Ministerio Público en la solicitud de peritos. Asimismo, en el mismo sentido, ALFONSO DAZA GONZÁLEZ

(2002) en su artículo “*El principio de igualdad de armas en el sistema procesal penal colombiano a partir del acto legislativo 03*”, publicado en la Revista de Derecho Principia Iuris No. 12 de la Universidad de Santo Tomás, desarrolla las bases generales del principio de igualdad de armas.

Con respecto a la Defensa Pública, BLANCO ODIO en “*El Derecho Procesal Penal Costarricense*” desarrolla los fundamentos esenciales y características principales de los sujetos que intervienen en el proceso penal, detallando las atribuciones y alcances de trabajo de dicha institución. Similar temática es explicada por Llobet (2014) en el “Código de Procedimientos Penales: Anotado y Comentado”, al mostrar los derechos del imputado y el papel trascendental de la defensa para efectivizar el correcto ejercicio de derecho de defensa.

Sobre los peritajes científicos forenses, en el artículo “La Pericia Médica” de Luis del Valle Carazo se desarrolla el concepto histórico del perito, sus características con base en lo establecido en la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial, junto con los derechos y responsabilidades que conlleva este cargo. Marvin Salas Zúñiga, en el “Manual de Ciencias Forenses” enseña el contexto en que nace el peritaje científico forense, la evolución de los laboratorios forenses, el papel del científico forense en su labor en la Administración de Justicia, así como la presentación de la evidencia científica en la Corte.

Más recientemente, MAURICIO DUCE (1998) en “La prueba pericial”, investiga los aspectos más relevantes en torno a este tipo de prueba dentro del proceso penal, con ello busca brindar elementos a los actores del sistema de justicia penal que les permitan comprender los desafíos presentados actualmente en la prueba pericial dentro del sistema acusatorio.

1.3.12. Papel del perito en el proceso penal

La figura principal en los peritajes científico forenses es el perito, por lo que es imperante analizar las potestades y servicios que brinda al juez, al Ministerio Público y a la defensa, así como su ámbito de actuación. Es por ello, que se analizarán los alcances de la labor del perito en el proceso penal peruano.

De manera inicial, es importante definir qué es un perito. Tal como lo indica MAURICIO DUCE (2012) en su artículo “*La prueba pericial en los sistemas procesales penales acusatorios en América Latina*”: el perito es un experto que brinda conocimientos especializados de relevancia para el proceso penal, tiene un papel fundamental en la resolución del caso.

La labor del perito debe ser requerida por el tribunal para esclarecer un punto determinado que es desconocido por el juez. De este modo, el perito debe cumplir dos funciones esenciales, según lo plantea Salas, en el “Manual de Ciencias Forenses” el cual refiere:

- “1) La científica que consiste en recolectar, analizar y evaluar la evidencia por los métodos que la ciencia y las condiciones que su laboratorio provean.
- 2) La forense, tan importante como la primera, que le obliga a tener la capacidad de comunicar e interpretar sus hallazgos para el juez y/o jurado en la Corte, así como para los operadores del derecho que intervienen en el proceso” (p. 33).

Siendo así, la labor del perito se visualiza en dos escenarios. En primer lugar, al realizar el peritaje como tal, mediante el análisis y procesamiento de la evidencia, junto con la emisión del dictamen pericial. En segundo lugar, debe comparecer en juicio para mostrar los resultados de la pericia cuando así sea requerido por las partes o el juez, así como aclarar diversos cuestionamientos que pueda tener el juez sobre la misma.

Asimismo, la función del perito no se enfoca en valorar si se dio o no el hecho delictivo, sino realizar un análisis y rendir un dictamen sobre determinado hecho, justamente por ello constituye un medio de prueba ordinario, por lo que su dictamen no es vinculante para el juez.

1.3.13. Naturaleza del perito

En el paradigma acusatorio los peritos según IBID (2010): por la aplicación a plenitud del principio de contradictorio, en donde las partes se encargan de formular ante el juez una tesis determinada, por medio de todos los instrumentos probatorios posibles, entre ellos la prueba pericial. Aquí el perito funge como asesor especializado de alguna de las partes del proceso y no se encuentra exclusivamente al servicio del tribunal ya que la labor probatoria recae en las partes.

Luego de analizar estos dos panoramas, se puede concluir que si bien la doctrina mayoritaria se ha inclinado por visualizar al perito como un auxiliar del juez, determinando así una naturaleza más objetiva de esta figura, esto no excluye que el perito pueda brindar una labor de ayuda científica o técnica a las partes en la elaboración de su respectiva teoría del caso. Cabe aclarar que dependerá del tipo de sistema en que se esté ubicado, sea acusatorio, inquisitivo o un mixto.

Se dice que el perito es un auxiliar del Tribunal, pero también sirve para aportar conocimientos especializados a las partes de proceso sin constituirse en un “asesor de parte” ya que se configura como un medio de prueba que puede ser solicitado directamente por el Ministerio Público, o bien indirectamente por la defensa a través del Tribunal.

1.3.14. Clasificación del Perito

Existen varias clasificaciones sobre los peritos, tal como la elaborada por BURGOS Y ROJAS (2004) en “Testigo, Perito y Consultor técnico en el Proceso Penal” al presentar tres subdivisiones:

“En una división inicial, muestra a los peritos oficiales y peritos particulares, siendo los primeros aquellos funcionarios que laboran en el Poder Judicial como parte de un cuerpo técnico pericial institucional y los segundos como aquellos profesionales que no están adscritos a la administración de justicia” (p. 58).

Además también se presenta una división de acuerdo al origen de la elección: peritos de oficio nombrados por el Juez de manera oficiosa o a petición de parte y los peritos

de parte, que son determinados por el Juez, pero la costa y propuesta de la parte que lo propone, para que controle las operaciones o examine y conclusiones del perito de oficio, o bien para que en conjunto con este realice los actos y produzca el dictamen.

Por ello es necesario clasificar a los peritos según la acreditación de sus facultades, sea peritos inscritos en listas oficiales, peritos diplomados o peritos idóneos. Siendo que con los peritos idóneos, hace referencia a aquellas personas que si bien tiene un conocimiento especial y profundo sobre alguna materia, no poseen el título sobre la misma, ya sea porque no está reglamentada o porque el perito no ha llevado los estudios respectivos; teniendo que para los fines del presente se utilizaran dos categorías de perito, siendo estos peritos institucionales y peritos de parte.

El principio de libertad probatoria permite que se incorpore al proceso todo tipo de prueba que sea obtenida legalmente, sin limitaciones taxativas de los tipos de prueba a aportar. En razón de esto, una de las partes podría proponer un especialista para que funja como perito de parte y colabore en el contra-examen de la pericia. Tal como lo indica Duce con respecto al contra-examen, *“se trata de una de las actividades por excelencia de los procesos acusatorios y que representa mayores dificultades para los litigantes”* (p.87).

DE SANTO (2000) en su artículo “La prueba pericial” clasifican este tipo de prueba como testimonial, indicando que no incluye este peritaje de parte dentro de la categoría de “peritajes” pues considera que corresponde a una opinión meramente testimonial sobre determinado hecho o acontecimiento. Sin embargo, se considera que el perito de parte no puede ser una prueba testimonial ya que no es un testigo, sino que brinda una determinada experticia a una de las partes del proceso.

Un aspecto de relevancia sobre este tema, es que si bien el principio de libertad probatoria permite presentar cualquier tipo de prueba obtenida legalmente, aquí evidentemente se encuentra de por medio la credibilidad del tipo de perito. Un perito institucional, solicitado por el Ministerio Público o el Tribunal, tendrá más credibilidad que uno aportado por una de las partes ya que ordinariamente el perito responderá a los intereses de la parte contratante.

Es natural y propio del principio de contradictorio, que una de las partes, sea o no el imputado, no presente un peritaje que le sea desfavorable. Incluso, en el caso de la defensa, sería ilegal que presente a un perito de parte que afecte al imputado, atentando contra el derecho constitucional a no incriminación y al derecho de defensa como tal.

1.3.15. Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Respecto al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el Perú este está en función de los diagnósticos científicos en personas vivas, restos humanos, cadáveres y muestras, a través de las investigaciones forenses e ciencias, dentro del marco de la Constitución Política del Perú y del ordenamiento jurídico nacional; además se debe participar en la formación de recursos humanos que estén especializados en las investigaciones inmersos en el campo de las ciencias forenses, que garanticen la mejora continua de la especialidad en Derecho, Medicina y otras profesiones.

Se tiene que la Jefatura Nacional del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses está en función de un Jefe Nacional que es designado por el Fiscal de la Nación, de quien depende directamente.

Sus esfuerzos están enfocados a la formulación, determinación, aprobación y ejecución de objetivos, políticas y directivas que afirmen el buen funcionamiento de la institución; es de mencionar que el cargo y nombramiento se oficializan mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación.

1.3.16. Cercanía funcional entre el Ministerio Público y los peritos.

Referente a la existencia de una cercanía funcional entre los peritos y el Ministerio Público en la práctica.

La señora MUÑOZ CASCANTE Defensa Pública de Colombia, explicó que: “[...] efectivamente se da una relación de cercanía originada en la dirección funcional, por lo que los fiscales son jefes de hecho”. (p.42)

La Defensora Pública SOLANO PORRAS de Costa Rica considera que: “[...] Existe una cercanía impropia entre Medicatura Forense y el Ministerio Público ya que estos

últimos tienen comunicación directa con los peritos, generando una oficiosidad que rompe la objetividad”. (p.78)

Por su parte, el Fiscal CONTRERAS SOTO de Perú manifestó respecto a dicha temática que:

“Probablemente la Defensa Pública sí se encuentra distanciada del Departamento de Medicina Legal y de los Laboratorios de Ciencias Forenses en comparación con el Ministerio Público; por dos razones. La primera, porque a la defensa no le está autorizado legalmente solicitar de manera directa las pericias requeridas. Segundo, por cuanto considera que también existe una deficiencia sobre este tema en la formación de los defensores públicos ya que en su opinión, son pocos los defensores que cuestionan los peritajes y los que solicitan aclaraciones, adiciones o presentan apelaciones del mismo y tampoco ofrecen peritos externos para rebatir aquellos” (p. 16).

1.4. Formulación del problema

¿Se genera una vulneración al principio de igualdad de armas entre la Defensa Pública y el Ministerio Público, respecto a la prueba pericial en el proceso penal peruano?

1.5. Justificación del estudio

Bajo el título “**Vulneración al principio de igualdad de armas entre la Defensa Pública y el Ministerio Público respecto a la prueba pericial en el proceso penal Peruano**”, esta investigación tiene como objetivo principal, evidenciar la vulneración al principio de igualdad de armas producto de un desbalance entre la Defensa Pública y Ministerio Público en la realización de peritajes.

La pertinencia académica tiene su esencia en la investigación, la importancia de estudiar este tema, se visualiza desde una pertinencia social y académica, que permite demostrar la relevancia de asegurar un balance entre el Ministerio Público y la defensa técnica de los imputados en el proceso penal.

Lo anterior, dejando claro que la presente investigación se enfoca especialmente en la Defensa Pública, por ser la institución estatal encargada de brindar asistencia técnica

gratuita a las personas que no tengan abogado privado, siendo que no se pretende abarcar la Defensa particular. La perspectiva social se enfoca en que el ejercicio del derecho de defensa, dentro del Estado de Derecho Peruano, debe ser fortalecido en todas sus facetas, siendo el principio de igualdad de armas un medio para proteger su vigencia plena.

En segundo lugar, de ahí se deriva el cimiento para efectuar una investigación referente a la materia Procesal Penal, dentro de la cual se desprenden temas relacionados con los Derechos Humanos, las Ciencias Forenses y principios como la igualdad procesal de armas, el principio de inocencia y el derecho de defensa, mismos que cobran relevancia cuando se considera que existe un desequilibrio de fuerzas entre dos partes muy importantes del proceso penal, como lo son el Ministerio Público y la Defensa.

Ello a fin de que la defensa pueda realizar su propia investigación tan igual que el Ministerio Público, situación a la cual el código procesal penal es omiso, determinado de este modo que la defensa pública debería tener una participación igualitaria con el Ministerio Público respecto a la selección de peritos, siendo factible a modo de solución la creación de un órgano autónomo independiente encargado de la realización de la prueba pericial otorgando un servicio igualitario.

1.6. Hipótesis

Existe una vulneración al principio de igualdad de armas entre el Ministerio Público y la Defensa Pública respecto a la prueba pericial en el proceso penal peruano producto de un desbalance normativo y funcional.

1.7. Objetivos.

1.7.1. Objetivo General

Evidenciar la vulneración al principio de igualdad de armas entre la Defensa Pública y Ministerio Público en la realización de la prueba pericial en el proceso penal Peruano.

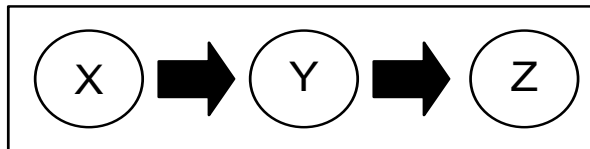
1.7.2. Objetivos Específicos

1. Analizar doctrinaria y normativamente la regulación de la prueba pericial a fin de precisar si se vulnera el principio de igualdad de armas.
2. Analizar qué derechos del acusado se vulneran tras el desbalance entre la Defensa Pública y Ministerio Público respecto a la realización de peritajes científico forenses.
3. Analizar doctrinariamente la realización de la prueba pericial entre la Defensa Pública y Ministerio Público.
4. Precisar el/los tipos de pericias que la defensa pública debería tener el mismo acceso que el Ministerio Público.

II. MÉTODO

2.1. Diseño de investigación.

El trabajo de investigación es no experimental; sobre ello Sánchez (2016): sobre los hechos existentes se recaba información, no teniendo control en las variables, ello da como resultado la información que se requiere, por ese motivo se debe trabajar sobre datos existentes.



Donde:

X: Muestra observada

Y: Información adquirida

Z: Conclusiones sobre la investigación

2.2. Variables y Operacionalización

2.2.1. Variables

Variable independiente:

- Principio de igualdad de armas.

Variable dependiente:

- Proceso penal peruano

2.2.2. Operacionalización:

Variables	DIMENSIONES/ INDICADORES	TECNICA
Principio de igualdad de armas.	Equilibrio en la posición de las partes procesales.	CUESTIONARIO
Proceso penal peruano	Prueba pericial	CUESTIONARIO

2.3. Población y Muestra

Población:

Se tiene como población a operadores del derecho Penal.

Muestra

Se tomará en cuenta:

Operadores del Derecho Penal	5
TOTAL	5

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad

Para Arias (1999), considera que:

“Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de obtener la información. Son ejemplos de técnicas: la observación directa, la encuesta en sus dos modalidades (entrevista o cuestionario), el análisis documental, análisis de contenido, etc.” (p. 25).

2.4.1. Técnicas de recolección de datos

Para Monje (2011) indica que:

“entrevista, es un método diseñado para obtener respuestas verbales a situaciones directas o telefónicas entre el entrevistador y el entrevistado.

Encuesta, resulta adecuado para estudiar cualquier hecho o características que las personas estén dispuestas a informar.

Observación, su objeto es comprender el comportamiento y las experiencias de las personas como ocurren en su medio natural, por lo tanto, se intenta observar y registrar información de las personas en sus medios con un mínimo de estructuras y sin interferencia del investigador”. (p. 134).

2.4.2. Instrumentos de recolección de datos

El instrumento referido ha sido diseñado por el investigador del presente proyecto; atendiendo los lineamientos establecidos por la operacionalización de las variables, además de tomar en cuenta lo observado en el proceso del presente estudio, teniendo como objetivos de aplicación a operadores del derecho penal, así como jurisprudencia y normativa nacional e internacional.

2.4.3. Validez y confiabilidad

La validación consta de un documento llamado constancia de validación; en el que se inicia con los datos del especialista, a continuación el cuestionar y la guía de pautas, los que se dividen en ámbitos, como la claridad, organización, suficiencia, actualidad intencionalidad, objetividad, consistencia, coherencia metodología.

La validez y confiabilidad, del presente ha sido dado por el análisis y la evaluación de los especialistas en el tema, quienes determinaron si los instrumentos usados fueron planteados con dedicación científica debida para obtener los resultados que busca la investigación.

2.5. Métodos de análisis de datos

A partir de esto, es que se busca plantear la existencia un desbalance entre el Ministerio Público y la Defensa Pública respecto a la prueba pericial científico forense.

Para lograr este objetivo se utilizarán tres métodos de investigación:

En primer lugar el método deductivo pues se partirá de un estudio general para derivar en conclusiones de un caso particular ya que por medio de un análisis de la prueba de peritaje científico forense y el papel de la Defensa Pública y el Ministerio Público en el proceso penal peruano, se buscará probar la existencia de una vulneración al principio de igualdad de armas en el proceso penal peruano.

Asimismo se hará uso del método comparativo, al estudiar las potestades y ventajas que posee el Ministerio Público frente a la defensa, para así demostrar el desequilibrio en la balanza entre ambas instituciones, en el acceso a la prueba pericial.

En tercer lugar, se aplicará el método sistemático, para el análisis de casos que permitan visualizar en diversos procesos tramitados en sede penal, una vulneración al principio de igualdad de armas y el acceso desigual respecto a la petición y desarrollo de la prueba pericial a favor de Ministerio Público.

2.6. Aspectos éticos

El presente se enfoca en el centro de un problema que no ha sido regulado correctamente por la ciencia del derecho y que tiene gran relevancia en la sociedad actual, para lo cual se ha usado una serie de fuentes bibliográficas de donde se obtuvo información que permita abordar de una manera más específica la materia de investigación, respetando los autores cuyas investigaciones y pensamientos han sido tomados a efectos de desarrollar de una manera más completa la investigación. El presente proyecto de investigación se encuentra exento de plagio, siguiendo los parámetros y formalidades de una adecuada investigación científica.

III. RESULTADOS

De la recopilación de dato, logrando entrevistar a 2 jueces especialistas en materia penal, a 1 abogado defensor público y finalmente a 2 abogados litigantes de la Ciudad de Piura, se han obtenido los siguientes resultados:

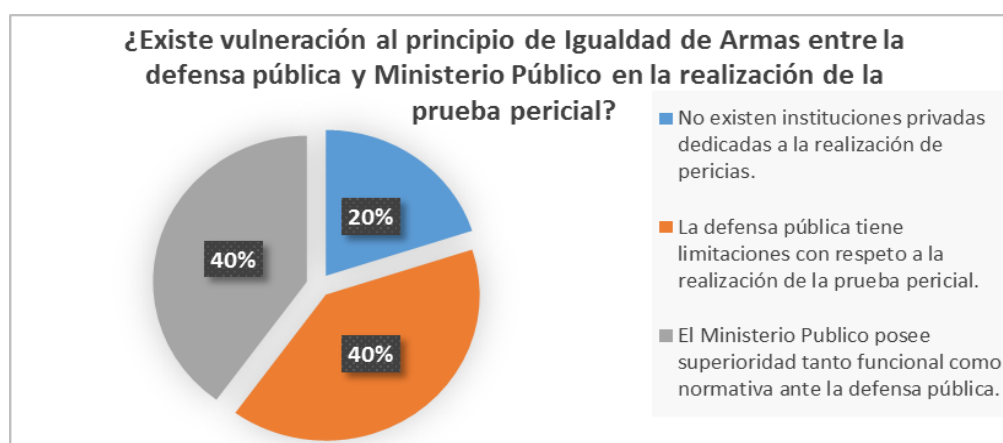
DE LA PREGUNTA N° 01 ¿Cree usted que existe vulneración al principio de Igualdad de Armas entre la defensa pública y Ministerio Público en la realización de la prueba pericial en el proceso penal peruano? ¿En qué aspecto?

Tabla N° 1

<i>¿Cree usted que existe vulneración al principio de Igualdad de Armas entre la defensa pública y Ministerio Público en la realización de la prueba pericial en el proceso penal peruano? ¿En qué aspecto?</i>	N° de encuestados	%
No existen instituciones privadas dedicadas a la realización de pericias.	1	20
La defensa pública tiene limitaciones con respecto a la realización de la prueba pericial.	2	40
El Ministerio Público posee superioridad tanto funcional como normativa ante la defensa pública.	2	40
SUMA	5	100

Autor: José Arturo García Moncada. *Fuente:* Abogados Penales.

Fuente: Encuesta aplicada a operadores del derecho, y/o especialista en derecho penal.



Autor: José Arturo García Moncada. *Fuente:* Abogados Penales.

Fuente: Encuesta aplicada a operadores del derecho, y/o especialista en derecho penal.

De los 5 encuestados se puede apreciar que la totalidad de ellos se encuentra de acuerdo con la existencia de la vulneración al principio de Igualdad de Armas, es así como la abogada defensora Blanca Mercedes Bruno Tello, trabajadora de la Defensoría Pública (ver anexo 1), señala: “[...] *la defensa pública tiene limitaciones con respecto a la realización de la prueba pericial*”, opinión compartida por el abogado defensor particular Miguel Eduardo Morocho Merino (ver anexo 3), quienes conforman el 40% de la población; también se tiene que, la Jueza del tercer juzgado penal unipersonal Nancy Carmen Choquehuanca (ver anexo 2), representante del 20% de los encuestados, menciona que: “[...] *no existen instituciones privadas dedicadas a la realización de pericias*”; así mismo, un 40% de la muestra, quien deviene a ser el abogado defensor particular Marco Armas Salinas (ver anexo 5), quien refiere que: “[...] *el Ministerio Público posee superioridad tanto funcional como normativa ante la defensa pública y como última repuesta en contra de la existencia de una vulneración al principio de Igualdad de Armas*”, opinión compartida con el juez del juzgado penal colegiado supraprovincial Rolando Siccha Navarro (ver anexo 4).

DE LA PREGUNTA N° 02: ¿Considera que existe vulneración a los derechos fundamentales durante el procedimiento de la prueba pericial por parte de la defensa pública?

Tabla N° 2

<i>¿Considera que existe vulneración a los derechos fundamentales durante el procedimiento de la prueba pericial por parte de la defensa pública?</i>	N° de encuestados	%
Si existe vulneración a los derechos fundamentales.	4	100
SUMA	4	100

Autor: José Arturo García Moncada. *Fuente:* Abogados Penales.

Fuente: Encuesta aplicada a operadores del derecho, y/o especialista en derecho penal.

De los 5 encuestados se puede apreciar que, la universalidad de ellos, es decir, el 100% de la muestra, se encuentra de acuerdo con la existencia de una vulneración a los derechos fundamentales de la parte acusada, durante el procedimiento de la prueba pericial por parte de la defensa pública, tal y como lo ha expresado la Jueza del tercer

juzgado penal unipersonal Nancy Carmen Choquehuanca (ver anexo 2), la defensora publica Blanca Mercedes Bruno Tello (ver anexo 1), el abogado defensor particular Miguel Eduardo Morocho Merino (ver anexo 3) y el abogado defensor particular Marco Armas Salinas (ver anexo 5), y el juez del juzgado penal supraprovincial Rolando Siccha Navarro (ver anexo 4).

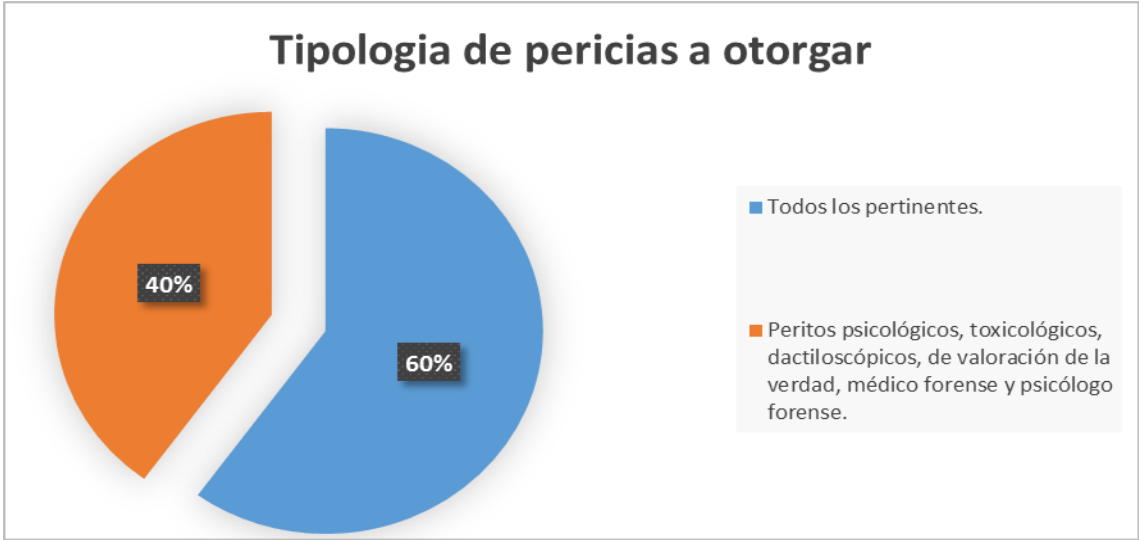
DE LA PREGUNTA N° 03: De ser afirmativa su respuesta ¿Qué tipo de pericias considera que el Estado debería otorgar a la defensa pública a fin de que exista igualdad de armas?

Tabla N° 3

<i>De ser afirmativa su respuesta ¿Qué tipo de pericias considera que el Estado debería otorgar a la defensa pública a fin de que exista igualdad de armas?</i>	N° de encuestados	%
Todos los pertinentes.	3	60
Peritos psicológicos, toxicológicos, dactiloscópicos, de valoración de la verdad, médico forense y psicólogo forense.	2	40
SUMA	5	100

Autor: José Arturo García Moncada. *Fuente:* Abogados Penales.

Fuente: Encuesta aplicada a operadores del derecho, y/o especialista en derecho penal.



Autor: José Arturo García Moncada. *Fuente:* Abogados Penales.

Fuente: Encuesta aplicada a operadores del derecho, y/o especialista en derecho penal.

De los 5 encuestados se puede apreciar que el 100% de ellos se encuentra de acuerdo al pensar que es necesario que el Estado otorgue más variedad de pericias a la defensa pública a fin de que exista igualdad de armas. (Ver anexo 1, 2, 3, 4 y 5)

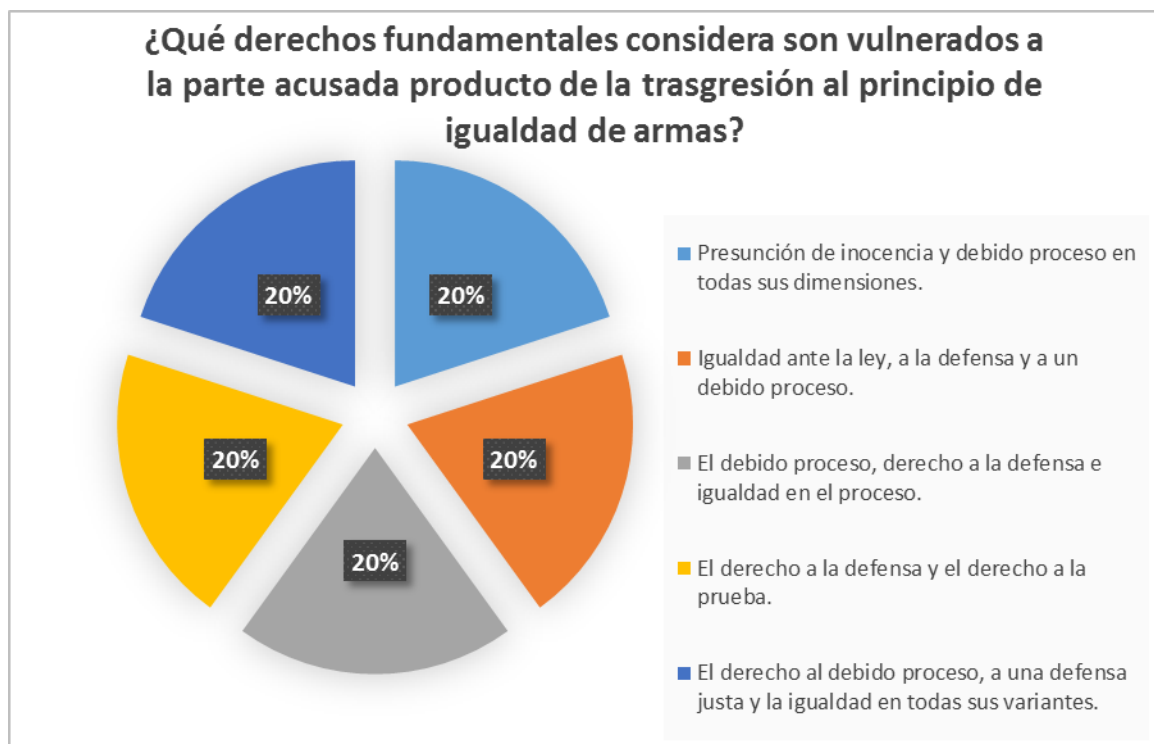
DE LA PREGUNTA N° 04: ¿Qué derechos fundamentales considera son vulnerados a la parte acusada producto de la trasgresión al principio de igualdad de armas entre la defensa pública y el Ministerio Público?

Tabla N° 4

<i>¿Qué derechos fundamentales considera son vulnerados a la parte acusada producto de la trasgresión al principio de igualdad de armas?</i>	N° de encuestados	%
Presunción de inocencia y debido proceso en todas sus dimensiones.	1	20%
Igualdad ante la ley, a la defensa y a un debido proceso.	1	20%
El debido proceso, derecho a la defensa e igualdad en el proceso.	1	20%
El derecho a la defensa y el derecho a la prueba.	1	20%
El derecho al debido proceso, a una defensa justa y la igualdad en todas sus variantes.	1	20%
SUMA	5	100%

Autor: José Arturo García Moncada. Fuente: Abogados Penales.

Fuente: Encuesta aplicada a operadores del derecho, y/o especialista en derecho penal.



Autor: José Arturo García Moncada. *Fuente:* Abogados Penales.

Fuente: Encuesta aplicada a operadores del derecho, y/o especialista en derecho penal.

Se puede apreciar que la totalidad de los encuestados, se encuentra de acuerdo, al referir que si se genera una vulneración a los derechos fundamentales del acusado producto de la trasgresión al principio de igualdad de armas entre la defensa pública y el Ministerio Público; refiriendo con el 20% de la muestra que, entre los derechos fundamentales transgredidos se tiene la presunción de inocencia y debido proceso en todas sus dimensiones, ello manifestado por la Jueza del tercer juzgado penal unipersonal Nancy Carmen Choquehuanca (ver anexo); la defensora publica Blanca Mercedes Bruno Tello (ver anexo 1) la cual representa un 20% refiere que los derechos vulnerados son el de igualdad ante la ley, a la defensa y a un debido proceso; con otro 20% de la población se tiene lo referido por el abogado defensor particular Miguel Eduardo Morocho Merino (ver anexo 3) al mencionar que entre los derechos fundamentales vulnerados se tiene el debido proceso, derecho a la defensa e igualdad en el proceso; el juez del juzgado penal colegiado supraprovincial Rolando Siccha Navarro cuya respuesta representa un 20% refiere que se afecta el derecho a la defensa y el derecho a la prueba, las cuales son fundamentales en todo juicio oral; por último se tiene lo manifestado por el abogado defensor particular Marco Armas Salinas (ver

anexo 5), cuya respuesta representa de igual forma un 20% refiriendo que los derechos que se le afecta al acusado son el derecho al debido proceso, a una defensa justa y la igualdad en todas sus variantes.

DE LA PREGUNTA N° 05: ¿Conoce usted el Decreto Legislativo N° 1407, que fortalece el servicio de la Defensa Pública?

Tabla N° 5

<i>¿Conoce usted el Decreto Legislativo N° 1407, que fortalece el servicio de la Defensa Pública?</i>	N° de encuestados	%
Si conoce.	5	100
SUMA	5	100

Autor: José Arturo García Moncada. *Fuente:* Abogados Penales.

Fuente: Encuesta aplicada a operadores del derecho, y/o especialista en derecho penal.

Los 5 encuestados que representan el 100% de la totalidad como se puede apreciar refieren tener conocimiento del Decreto Legislativo N° 1407, que fortalece el servicio de la Defensa Pública, estando entre los que dan dicha respuesta, la Jueza del tercer juzgado penal unipersonal Nancy Carmen Choquehuanca, la defensora publica Blanca Mercedes Bruno Tello, el abogado defensor particular Miguel Eduardo Morocho Merino y el abogado defensor particular Marco Armas Salinas y el juez del juzgado penal colegiado supraprovincial Rolando Siccha Navarro. (ver anexo 1, 2, 3, 4, 5)

DE LA PREGUNTA N° 6: El Artículo N° 5 en su inciso B del decreto legislativo antes mencionado establece: “(...) Brindar asistencia técnico pericial forense y de trabajo social a las/los defensoras/es públicas/os, para el ejercicio de la defensa” ¿Cree que dicha medida es suficiente para evitar se genere una vulneración al principio de igualdad de armas entre la defensa pública y el Ministerio Público?

Tabla N° 6

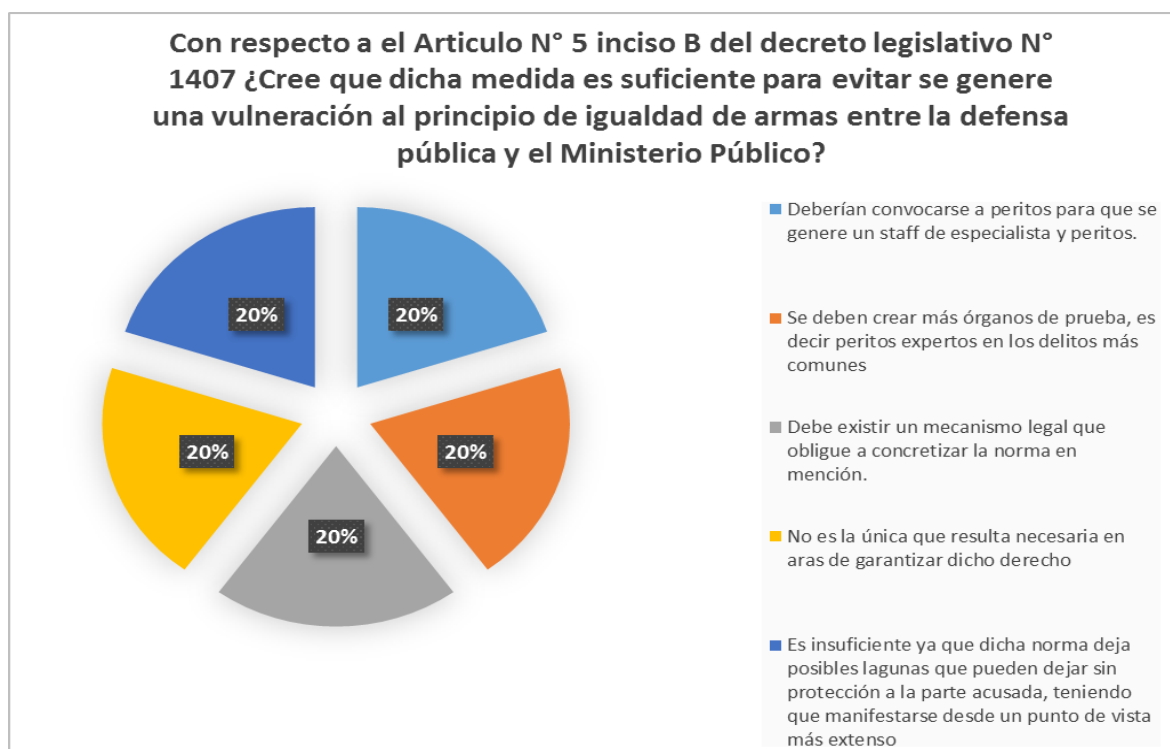
<i>¿Cree que dicha medida es suficiente para evitar se genere una vulneración al principio de igualdad de</i>	N° de encuestados	%
---	-------------------	---

armas entre la defensa pública y el Ministerio Público?

Deberían convocarse a peritos para que se genere un staff de especialista y peritos.	1	20%
Se deben crear más órganos de prueba, es decir peritos expertos en los delitos más comunes	1	20%
Debe existir un mecanismo legal que obligue a concretizar la norma en mención.	1	20%
No es la única que resulta necesaria en aras de garantizar dicho derecho	1	20%
Es insuficiente ya que dicha norma deja posibles lagunas que pueden dejar sin protección a la parte acusada, teniendo que manifestarse desde un punto de vista más extenso	1	20%
SUMA	5	100%

Autor: José Arturo García Moncada. *Fuente:* Abogados Penales.

Fuente: Encuesta aplicada a operadores del derecho, y/o especialista en derecho penal.



Autor: José Arturo García Moncada. *Fuente:* Abogados Penales.

Fuente: Encuesta aplicada a operadores del derecho, y/o especialista en derecho penal.

Se puede apreciar que la totalidad de los encuestados siendo estos 5 de ellos se encuentra de acuerdo, al referir que lo establecido por el artículo N° 5 en su inciso B del decreto legislativo antes mencionado no resulta ser suficiente para evitar se genere una vulneración al principio de igualdad de armas entre la defensa pública y el Ministerio Público; refiriendo con el primer 20% la Jueza del tercer juzgado penal unipersonal Nancy Carmen Choquehuanca (ver anexo 2) que como solución deberían convocarse a peritos para que se genere un staff de especialista y peritos; la defensora pública Blanca Mercedes Bruno Tello (ver anexo 1) la cual representa un 20% refiere que se deberían crear más órganos de prueba, es decir peritos expertos en los delitos más comunes y se pueda demostrar la inocencia del usuario, teniendo que solo se cuenta con médicos y psicólogos forenses, más no en otras materias; con otro 20% de la población se tiene lo referido por el abogado defensor particular Miguel Eduardo Morocho Merino (ver anexo 3) quien refiere que debe existir un mecanismo legal que obligue a concretizar la norma en mención; el juez del juzgado penal colegiado supraprovincial Rolando Siccha Navarro (ver anexo 4), cuya respuesta representa un 20% refiere que es una medida importante que coadyuva para un adecuado derecho de defensa, no siendo la única que resulta necesaria en aras de garantizar dicho derecho; por último se tiene lo manifestado por el abogado defensor particular Marco Armas Salinas (ver anexo 5), cuya respuesta representa de igual forma un 20% refiriendo que dicha normativa es insuficiente ya que dicha norma deja posibles lagunas que pueden dejar sin protección a la parte acusada, teniendo que manifestarse desde un punto de vista más extenso, brindando más solvente funcional y normativo.

DE LA PREGUNTA N° 07: Con respecto a la normativa penal peruana ¿Qué propondría usted a fin de conseguir un balance entre la defensa Pública y el Ministerio Público?

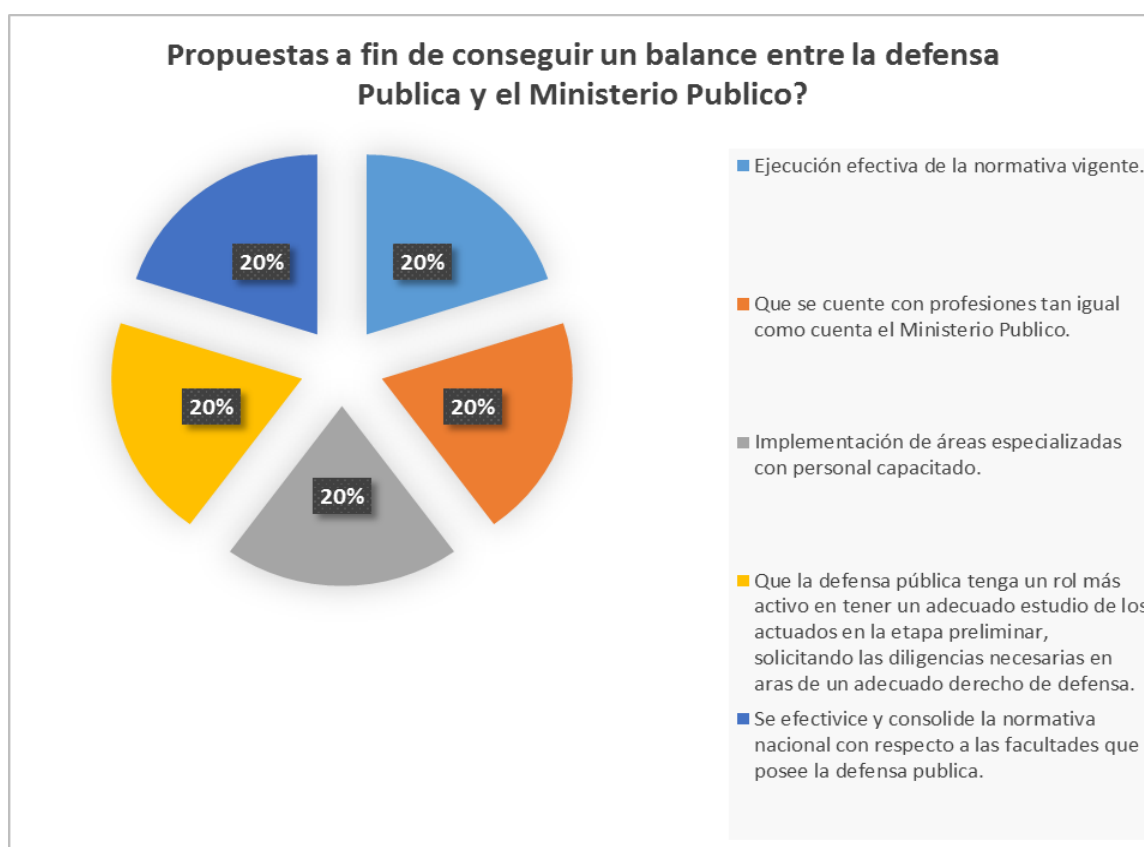
Tabla N° 7

<i>¿Qué propondría usted a fin de conseguir un balance entre la defensa Pública y el Ministerio Público?</i>	N° de encuestados	%
Ejecución efectiva de la normativa vigente.	1	20

Que se cuente con profesiones tan igual como cuenta el Ministerio Publico.	1	20
Implementación de áreas especializadas con personal capacitado.	1	20
Que la defensa pública tenga un rol más activo en tener un adecuado estudio de los actuados en la etapa preliminar, solicitando las diligencias necesarias en aras de un adecuado derecho de defensa.	1	20
Se efectivice y consolide la normativa nacional con respecto a las facultades que posee la defensa pública.	1	20
SUMA	5	100

Autor: José Arturo García Moncada. *Fuente:* Abogados Penales.

Fuente: Encuesta aplicada a operadores del derecho, y/o especialista en derecho penal.



Autor: José Arturo García Moncada. *Fuente:* Abogados Penales.

Fuente: Encuesta aplicada a operadores del derecho, y/o especialista en derecho penal.

Se puede apreciar que el 100% de los encuestados siendo estos 5 se encuentra de acuerdo, dando posibles propuesta a fin de **conseguir un balance entre la defensa Publica y el Ministerio Publico**; como primera respuesta la cual corresponde a un 20% dada por la Jueza del tercer juzgado penal unipersonal Nancy Carmen Choquehuanca (ver anexo2) refiere que se debería dar ejecución efectiva de la normativa vigente; la defensora publica Blanca Mercedes Bruno Tello (ver anexo 1) la cual representa un 20% refiere que se debería contar con profesiones tan igual como cuenta el Ministerio Publico que encuentre al cuidado de todos los usuarios; con otro 20% de la población se tiene lo referido por el abogado defensor particular Miguel Eduardo Morocho Merino (ver anexo 3) el cual propone se dé la implementación de áreas especializadas con personal capacitado, en temas relacionados a casos concretos dentro de un proceso y que se haga de obligatorio mediante un normal especializada; el juez del juzgado penal colegiado supraprovincial Rolando Siccha Navarro (ver anexo 4) cuya respuesta representa un 20% refiere que la defensa pública debería tener un rol más activo en tener un adecuado estudio de los actuados en la etapa preliminar, solicitando las diligencias necesarias en aras de un adecuado derecho de defensa; por último se tiene lo manifestado por el abogado defensor particular Marco Armas Salinas (ver anexo 5), cuya respuesta representa de igual forma un 20% refiriendo que se debería efectivizar y consolidar la normativa nacional con respecto a las facultades que posee la defensa publica, a fin de proteger los derechos del acusado.

IV. DISCUSION

Al respecto, se puede discutir que:

Hipótesis y Objetivo general N° 1: Existe una vulneración al principio de igualdad de armas entre el Ministerio Público y la Defensa Pública respecto a la prueba pericial en el proceso penal peruano producto de un desbalance normativo y funcional.

En aras de garantizar el derecho constitucional al debido proceso, es necesario que en la ley y en la ejecución de esta, todos los actores involucrados en el proceso penal cuenten con las mismas potestades y prerrogativas, como requisito sine qua non para el ejercicio de una defensa justa.

Ello implica que en todas las fases del proceso, ambas instituciones deben contar con los mismos instrumentos y posibilidades de actuación, con el objetivo primordial de garantizar una defensa integral para el imputado.

Siendo necesario determinar que en el proceso penal peruano existe un evidente desbalance entre el Ministerio Público y la Defensa Pública respecto a la prueba pericial, producto de una mayor facilidad de acceso y cercanía funcional al cuerpo de peritos del Departamento de Medicina Legal y Laboratorio de Ciencias Forenses por parte del Ministerio Público. Este desbalance que es generado por la misma ley y maximizado en la práctica, produce una afectación al desempeño de la Defensa Pública a la hora de velar por los derechos constitucionales y procesales de los imputados, lo cual atenta contra el principio de igualdad de armas que debe regir en la práctica de nuestro sistema procesal penal.

Por lo que el ejercicio del derecho de defensa, dentro del Estado de Derecho Peruano, debe ser fortalecido en todas sus facetas, siendo el principio de igualdad de armas un medio para proteger su vigencia plena. Siendo así, entre más consolidada se encuentre la Defensa a la hora de realizar sus labores, logrará mantener un equilibrio de fuerzas frente al actuar del Ministerio Público, así como la prestación de un servicio público de calidad para los ciudadanos peruanos.

El principio de igualdad de armas, radica en que las partes de un proceso deben tener las mismas posibilidades, garantías y derechos, para poder accionar, impugnar, defenderse, alegar o intervenir en un proceso. Ello tendría profunda relevancia en el ejercicio de todas las etapas procesales, pues significa que todas las partes deben tener un debido y un permanente conocimiento de la marcha del proceso, para poder hacer gala de sus derechos de defensa, del derecho a la prueba y de poder accionar en permanente igualdad. El resultado que se espera es que el proceso sea justo e imparcial.

El principio de igualdad de armas, se encuentra plenamente interrelacionado e intrínsecamente inmerso con todos los demás principios propios del sistema procesal acusatorio adversarial y garantista, tales como el principio de oralidad, contradicción, del derecho a la prueba, del derecho a la imparcialidad, etc.

Objetivo específico 1: Analizar doctrinaria y normativamente la regulación de la prueba pericial a fin de precisar si se vulnera el principio de igualdad de armas.

Es necesario el iniciar citando la tesis de Delgado (2016), quien analiza y hace un estudio riguroso de temas sobre la vigencia efectiva del principio de igualdad procesal y los derechos del agraviado, con quien comparto la postura que para transformar nuestro proceso penal hace falta mucho más que el establecimiento de normas garantistas tales como la del artículo I del TP referido a la Igualdad Procesal sino que dichos principios deben efectivizarse en la realidad,

Resulta también relevante el mencionar a modo comparativo la Ley Federal mexicana de Defensoría Pública y de Reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial en el capítulo VI en su artículo N° 36 disposición III: “Se procurará extender la capacitación a los trabajadores sociales y peritos, en lo que corresponda y para interrelacionar a todos los profesionales del Instituto Federal de Defensoría Pública y optimar su preparación y el servicio que prestan.”. Dando de este modo una visión compartida sobre un tema que es de interés no solo nacional sino internacional, con la finalidad de obtener un sistema jurídico más estable, que se respalde bajo el cumplimiento de las garantías constitucionales de la sociedad, logrando un servicio estatal cabal, buscando evidenciar un problema nacional con la finalidad de lograr un resultado.

Aunado a ello comparto lo referido en Legislación Chilena sobre la ley de la Defensoría N° 19.718, que en el inciso h) del artículo N° 20 faculta al defensor regional ha “Autorizar la contratación de peritos para la realización de los informes que solicitaren los abogados que se desempeñen en la defensa penal pública, y aprobar los gastos para ello, previo informe del jefe de la respectiva unidad administrativa regional”.

De ellos se puede determinar la importancia de una secuencia funcional con respecto a la permisión de presentar una prueba pericial en la legislación nacional, por lo cual se debe procurar la implementación de una base normativa sólida que abarque todos los supuesto facticos en los cuales se puede ver inmersa la defensa pública. Siendo también necesario el satisfacer la garantía constitucional de proceso debido y el derecho a contar con una defensa jurídica adecuada, habrán de medirse en igualdad de condiciones procesales, bajo un principio de “igualdad de armas”, que haga real y no exclusivamente declarativas las garantías constitucionales implicadas.

Es de interés por ello el mencionar el Decreto Legislativo N° 1407 el cual en su artículo N° 5 inciso b) mencionar “Brindar asistencia técnico pericial forense y de trabajo social a las/los defensoras/es públicas/os, para el ejercicio de la defensa”, que a manera personal y a critica de varios conocedores de la materia como Jueces, Defensores Públicos y abogados resulta ser insuficiente ya que no brinda o establece una medida específica que otorgue de un cuerpo más amplio de peritos a la defensa pública, con el fin de salvaguardar los derechos de los acusados que estén inmersos en un proceso.

Por este motivo en la presente investigación se formuló la pregunta N° 6: Con respecto a el Artículo N° 5 inciso B del decreto legislativo N° 1407 ¿Cree que dicha medida es suficiente para evitar se genere una vulneración al principio de igualdad de armas entre la defensa pública y el Ministerio Público?, a la que el 100% de los encuestados hizo evidente su disconformidad, generando diversas soluciones al conflicto en cuestión, siendo entre lo más relevante lo referido por la Jueza del tercer juzgado penal unipersonal Nancy Carmen Choquehuanca, quien manifestó “[...] Debe existir un mecanismo legal que obligue a concretizar la norma en mención.” O la defensora pública Blanca Mercedes Bruno Tello quien refiere “[...] Es insuficiente ya que dicha

norma deja posibles lagunas que pueden dejar sin protección a la parte acusada, teniendo que manifestarse desde un punto de vista más extenso”.

Así, podemos concluir que, con respecto a la base normativa nacional esta se encuentra en una gran carecían, tanto funcional, estructural y normativa, en específico y con lo que es de nuestro interés la prueba pericial, generando ello un menoscabo de derechos y principios que le asisten a todo usuario que se encuentre inmerso dentro de un proceso, teniendo de este modo la necesidad de genera un mayor sustento normativo, que se efectivice en todas su posibles vertientes, con la finalidad de resguardar los derechos de todo individuo; direccionando la presente investigación, en el buscar consolidar de manera efectiva el cumplimiento del Principio de igualdad de armas en todas sus variantes dentro de un proceso, centrándonos en el acceso a la prueba pericial para una defensa justa e igualitaria.

Objetivo específico 2: Analizar cuáles son los derechos vulnerados del acusado tras el desbalance entre la Defensa Pública y Ministerio Público respecto a la realización de peritajes científico forenses.

Es necesario el mencionar la tesis de posgrado titulada “La eficacia del principio de igualdad de armas como la protección de los derechos constitucionales de defensa y debido proceso y su aplicación en las áreas probatorias del sistema procedimental penal acusatorio” la cual hacen referencia a “La desigualdad de los recursos de investigación”, mencionando: “además de ser fundamental para el proceso de confrontación, la igualdad de armas es especialmente importante —y debe ser vigilada con mayor fervor— en las etapas de investigación del proceso de justicia. La injusticia de esta desigualdad de recursos ha sido fuertemente debatida. Vamos a analizar los argumentos subyacentes acerca de la legitimidad de los recursos abrumadores de la fiscalía, en particular, a la luz de la carga de la acusación”.

Esto por lo general, no es diferente en ningún sistema de justicia penal maduro en el que el Ministerio Público generalmente tienen mejores recursos de investigación en comparación con los defensores públicos, incluso de abogados privados, generando de

este modo una vulneración cuasi directo a los derechos constitucionales de la parte acusada.

Este desbalance que es generado por la misma ley y maximizado en la práctica, produce una afectación al desempeño de la Defensa Pública a la hora de velar por los derechos constitucionales y procesales de los imputados, lo cual atenta contra el principio de igualdad de armas que debe regir en la práctica de nuestro sistema procesal penal.

Compartiendo de este modo la postura de Llobet (2009) al comentar el artículo 1 del Código Procesal Penal costarricense, el cual refiere “*[...] a todos los imputados deben respetárseles sus derechos, no siendo posible una relativización de los mismos, lo que conlleva a que tenga que garantizarse la presunción de inocencia, el derecho de defensa y que se prohíba todo tipo de coacción tendiente a obtener su confesión. Se debe garantizar el derecho de defensa técnica del imputado y el derecho de abstenerse de declarar, los que tienen una relación entre sí. Por otro lado, tiene relevancia la garantía de derecho de ofrecer pruebas de descargo*”. (p.76)

Siendo ello un claro ejemplo del deber de garantizar los derechos de los acusados que se encuentren inmersos en un proceso penal, teniendo como una realidad la vulneración efectiva de los derechos del acusado por la trasgresión al principio de igualdad de armas y quien mejor para determinar la existencia de la vulneración a los derechos del acusado que los mismos operadores del derecho.

Por este motivo en la presente investigación se formularon las preguntas N° 2: ¿Existe vulneración a los derechos fundamentales durante el procedimiento de la prueba pericial por parte de la defensa pública?, de la cual un 80% de los encuestado refirió que sí, y la pregunta N°4: ¿Qué derechos fundamentales considera son vulnerados a la parte acusada producto de la trasgresión al principio de igualdad de armas?, pregunta de la cual el 100% de encuestados conformados por operadores del derecho penal, como jueces, abogados y defensores público, dieron a conocer dentro de la praxis una realidad latente.

Refiriendo la Jueza del tercer juzgado penal unipersonal Nancy Carmen Choquehuanca, la existencia de la transgresión a la presunción de inocencia y debido proceso en todas sus dimensiones, la defensora pública Blanca Mercedes Bruno Tello refiere que los derechos vulnerados son el de igualdad ante la ley, a la defensa y a un debido proceso; el abogado defensor particular Miguel Eduardo Morocho Merino menciona que entre los derechos fundamentales vulnerados se tiene el debido proceso, derecho a la defensa e igualdad en el proceso; la jueza del juzgado penal colegiado supraprovincial Melina Timaná Álvarez cuya refiere que se afecta el derecho a la defensa y el derecho a la prueba, las cuales son fundamentales en todo juicio oral; entre otras postura relacionadas.

Determinando de este modo que es más que evidente la existencia de una vulneración a los derechos fundamentales del acusado, producido ello por la trasgresión al principio de igualdad de armas, ello originado dentro de los márgenes del proceso penal peruano, concluyendo que se generaría en su mayoría el menoscabo de los derechos de presunción de inocencia, el debido proceso, igualdad ante la ley, el derecho a la defensa, el derecho a la prueba, entre otras.

Objetivo específico N° 3: Analizar doctrinariamente posturas en torno a la realización de la prueba pericial entre la Defensa Pública y Ministerio Público.

Es de mencionar que según lo referido por ABERL en su artículo “La Prueba Pericial”, refiere: “[...] de modo que la prueba pericial no introduce hechos nuevos, sino que, sobre unos hechos ya aportados, proporciona al juez máximas de experiencia para complementar su capacidad de juicio”; determinado de ello la importancia que significa la actividad pericial dentro de un proceso de índole penal.

La señora MUÑOZ CASCANTE Defensa Pública de Colombia, explicó con respecto a la prueba pericial, que efectivamente se da una relación de cercanía originada en la dirección funcional, por lo que los fiscales son jefes de hecho y quienes dotan del conocimiento de la conducta delictiva a los peritos; dándose una suerte de

subordinación indirecta de la cual comparto postura, generando ello un desnivel ventajoso entre el Ministerio Público y la defensa pública.

De igual forma tomamos lo referido por la defensora pública SOLANO PORRAS de Costa Rica quien manifiesta que “efectivamente existe una cercanía impropia entre Medicatura Forense y el Ministerio Público ya que estos últimos tienen comunicación directa con los peritos, generando una oficiosidad que rompe la objetividad”, impulsando de ello la necesidad de incluir en la legislación actual una entidad autónoma que no se encuentra deslindada de la actividad ni del Ministerio Público ni de la defensa pública, logrando de una imparcialidad absoluta, sin ligaduras funcionales, generadas por la misma norma nacional.

Por su parte, el Fiscal CONTRERAS SOTO, de manera muy concreta manifestó respecto a dicha temática que probablemente la Defensa Pública sí se encuentra distanciada del Departamento de Medicina Legal y de los Laboratorios de Ciencias Forenses en comparación con el Ministerio Público; por dos razones. La primera, porque a la defensa no le está autorizado legalmente solicitar de manera directa las pericias requeridas. Segundo, por cuanto considera que también existe una deficiencia sobre este tema en la formación de los defensores públicos ya que en su opinión, son pocos los defensores que cuestionan los peritajes y los que solicitan aclaraciones, adiciones o presentan apelaciones del mismo y tampoco ofrecen peritos externos para rebatir aquellos.

Objetivo específico N° 4: Precisar el/los tipos de pericias que la defensa pública debería tener el mismo acceso que el Ministerio Público.

La pericia es la unión entre conocimientos científicos e investigativos concibiéndose como “prueba científica”, definida por Peyrano como: “una pericia calificada por la idoneidad del experto que la lleva a cabo” (p. 86). Por lo que se caracteriza, también, por el uso de avances notorios y recientes en los campos de la ciencia y la tecnología. Agrega además que si bien lo corriente es que las pruebas científicas se construyan sobre las ciencias (Química, Genética, Biología, etc), también las humanas o sociales

(Psicología, Estadística, Sociología, etc.) pueden ser utilizadas a tal efecto, aunque de modo más excepcional.

Por este motivo la importancia y correlación de lo que significa el prever de dicho conocimiento científico a la defensa pública, tan igual que al Ministerio Público, a fin de fortalecer en la practica el principio a la igualdad de armas, entre otros parecidos.

Planteándose en relación a lo antes esbozado en la presente investigación la pregunta N° 3: ¿Qué tipo de pericias considera que el Estado debería otorgar a la defensa pública a fin de que exista igualdad de armas?; obtenido en un su totalidad una respuesta referente a la falta de este tipo de profesionales con respecto a la defensa pública; otorgando de este modo más firmeza a la visión de la necesidad de una pericia especializada que abarque o cubra todos los supuestos facticos, a fin de lograr un derecho de defensa justo, en relación al cumplimiento del principio de igualdad de armas.

A ello la importancia que significa la prueba pericial para las partes inmiscuidas en un proceso de índole penal, siendo en esencia la prueba pericial un elementos de convicción que es el resultado de avances tecnológicos y de los más recientes desarrollos en el campo experimental, que se definen por una metodología regida por principios propios y de estricto rigor científico, cuyos resultados otorgan una convicción mayor por la generalidad de las evidencias.

V. CONCLUSIONES

1. Se vulnera el principio de igualdad de armas entre el Ministerio Público y la defensa pública respecto a la prueba pericial, producto de una mayor facilidad de acceso y cercanía funcional al cuerpo de peritos del Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses por parte del Ministerio Público; por lo que se debe crear un órgano autónomo independiente encargado de la realización de prueba pericial que brindado un servicio igualitario e imparcial.
2. Se evidencia respecto a la regulación de la prueba pericial nacional, una vulneración al principio de igualdad de armas, por una inobservancia tanto normativa como funcional, debiendo consolidar más la normativa nacional en relación al acceso a la prueba pericial.
3. Los derechos vulnerados del acusado ante el desbalance entre la defensa pública y el Ministerio Público son los siguientes: presunción de inocencia, el debido proceso, igualdad ante la ley, el derecho a la defensa y el derecho a la prueba.
4. La defensa pública sí se encuentra distanciada del Departamento de Medicina Legal y de los Laboratorios de Ciencias Forenses en comparación con el Ministerio Público; ello se refleja en el hecho que la defensa no se le está autorizada legalmente solicitar de manera directa las pericias requeridas en ninguna de las fases de un proceso.
5. Las pericias especializadas con las que debe contar tanto de la defensa pública como del Ministerio Público son: pericias ligadas a las ciencias (Química, Biología, Genética, etc.), como también a las humanas o sociales (Psicología, Sociología, Estadística, etc.).

VI. RECOMENDACION:

- I. Creación de un órgano autónomo independiente encargado de la realización de prueba pericial que brinde un servicio igualitario tanto al Ministerio Público, como a la defensa pública, a través de un decreto legislativo que cree un organismo descentralizado de la administración pública estatal
- II. Dotar a través de un decreto legislativo un mejor presupuesto a la defensa pública, con el objetivo de reforzar su unidad de investigación, por lo que la defensa pública debe contar con una unidad de apoyo técnico, que preste su asesoría a las labores de los defensores públicas de todas las materias, integrada por investigadores, psicólogos, trabajadores sociales entre otros profesionales que apoyen la labor de la defensa técnica.

VII. PROPUESTA

DECRETO LEGISLATIVO POR EL QUE SE CREA EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO "CENTROS DE PERICIAS LEGALES Y CIENTÍFICAS"

Artículo 1.- Se crea el Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, que se denominará CENTROS DE PERICIAS LEGALES Y CIENTÍFICAS, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Artículo 2.- El CENTROS DE PERICIAS LEGALES Y CIENTÍFICAS tendrá por objeto prestar servicio pericial especializado, a fin de fortalecer lo dispuesto en la Ley del Servicio de Defensa Pública y la Ley orgánica del Ministerio Público, con respecto a la obtención de medios de prueba, para lo cual tendrá las siguientes funciones:

I.- Brindar auxilio judicial especializado tanto a la defensa pública como al Ministerio Público, con respecto a la realización de prueba pericial;

II.- Realizar todas aquellas acciones tendientes a garantizar el derecho al debido proceso, a la prueba y el principio de igualdad de armas, con respecto la prueba pericial;

III.- Fortalecer el servicio de justicia estatal, aunado a garantizar los derechos de las partes que participen dentro de una proceso judicial.

IV.- Conocer y aplicar la normatividad general en materia de pericia científica, tanto nacional como internacional, a fin de proponer adecuaciones a la normatividad estatal y esquemas que logren su correcto cumplimiento;

V - Realizar todas aquellas acciones que sean necesarias para mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos.

VI.- Promover, apoyar y llevar a cabo la capacitación en la materia, de los profesionales, especialistas y técnicos;

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. C-536 (Jaime Araujo Renteria 2008).
2. Abad, S. A. (2015). *Hacia una defensa publica de calidad*.
3. Aberlluch, X. (2015). *La Prueba Pericial*. Barcelona-España: Bosch Editor.
4. Arias. (1999). *Técnicas de recolección de datos*.
5. Avila, A. A. (2015). *Hacia una defensa pública de calidad*. Mexico.
6. Baytelman, D. (2015). *La prueba pericial en el proceso penal Latinoamericano*.
7. Bernal. (2010). *La investigacion cientifica*.
8. Bötticher, E. (1995). La igualdad ante el juez. *Revista de Derecho Procesal*, 75.
9. Chacón, B. M. (2004). *Testigo, Perito y Consultor técnico en el Proceso Penal*.
10. Cobb, P. (1998). *Crime Scene to Court: The Essentials of Forensic Science*. United Kingdom.
11. *Codigo de Procedimientos Penales* . (s.f.). Colombia.
12. *Código Procesal* . (2007). Mar del Plata .
13. *Codigo Procesal Penal* . (s.f.). Paraguay.
14. Código procesal penal peruano - Decreto Legislativo N°957. (s.f.). *Derecho a la defensa técnica*.
15. *Codigo Procesal Peruano*. (s.f.). Perú.
16. *Decreto Legislativo N° 1407*. (2018). Peru.
17. Domínguez. (2015). *Tipos de investigacion*.
18. Fernández. (2002). *La prueba pericial*.
19. Fierro, H. F. (2015). *Hacia una defensa pública de calidad*. Mexico.
20. Flores. (2012). *El perito*.
21. Gonzales, A. L. (2017). *El Principio de igualdad de armas en el proceso*. Colombia.
22. González, A. D. (2002). *El principio de igualdad de armas en el sistema procesal penal*. Principia Iuris N° 12.
23. Ibid. (2010). *Los peritos*.
24. Jouvencel, M. (2002). *Manual de Perito Médico*. España: Ediciones Díaz De Santos.
25. León, Z. (2012). *La actividad pericial en el nuevo código penal costarricense*. Costa Rica.
26. *Ley de la Defensoria N° 19.718*. (s.f.). Chile.

27. Luis, M. C. (2015). *La eficacia del principio de igualdad de armas como amparo de los derechos constitucionales de defensa y debido proceso*. Manizales.
28. Maier., J. (2011). *Derecho Procesal Penal*. Buenos Aires: Editores del Puerto.
29. Mauricio. (1998). *La prueba pericial en los sistemas procesales penales acusatorios de America Latina*.
30. Medina, F. C. (s.f.). *El Principio De Igualdad De Armas Su Trascendencia En El Nuevo Modelo Procesal Penal*.
31. Midón. (2012). *Derecho de Procedimientos Penales: La actuación perital*.
32. Midón., M. (s.f.). *Ponencia presentada en el XXIV Congreso Nacional de Derecho*.
33. Nicolas, K. D. (2016). *La Vigencia Efectiva del Principio de Igualdad Procesal y los Derechos del Agraviado*. Trujillo – Perú.
34. Nishihara, M. H. (2017). *Principales Principios Del Proceso Penal*.
35. Nores, C. (2004). *La prueba pericial y su regulación*.
36. Nores., J. C. (2007). *La prueba en el proceso penal*. Buenos Aires.
37. Odio, B. (2014). *El Derecho Procesal Penal Costarricense*. Costarrica.
38. Orbaneja, G. (1997). *El perito Judicial*.
39. Orbaneja., E. G. (1995). *Derecho Procesal Penal*. Madrid-España.
40. Perú, C. P. (1996).
41. Peyrano. (1998). *La prueba científica forense*.
42. Rentería, J. A. (s.f.). *Sentencia C-536 de 2008*. Colombia.
43. Rodríguez., J. L. (2005). *recho Procesal Penal I: Aspectos generales*. San José.
44. Roxin., C. (2000). *Derecho Procesal Penal*. Buenos Aires.
45. *Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia*. (1990). Costa Rica.
46. *Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica* . (1990).
47. Santo, D. (2000). *La prueba pericial*.
48. Schiaffino., C. M. (1998). *El perito y la prueba*. Buenos Aires-Argentina.
49. *Tercera Sala de la Corte Suprema de Justicia costarricense*. (s.f.).
50. *Voto N o 107-2006* . (2006).
51. *Voto No 15-90* . (1990).
52. Zúñiga, S. (2002). *La policia y la medicina*.
53. Zúñiga., S. (2000). *Manual de Ciencias Forenses* .

VIII. ANEXOS

Matriz de Constancia Lógica

PROBLEMA	HIPÓTESIS	OBJETIVOS	VARIABLES
¿Se vulnera el principio de igualdad de armas entre la Defensa Pública y el Ministerio Público, con respecto al acceso a la prueba pericial en el proceso penal peruano?	Existe una vulneración al principio de igualdad de armas entre el Ministerio Público y la Defensa Pública respecto a la prueba pericial en el proceso penal peruano ya que la defensa Pública se encuentra limitada en cuanto al acceso a una asesoría especializada en materia de peritajes científico.	<p>General</p> <ul style="list-style-type: none"> •Evidenciar la vulneración al principio de igualdad de armas entre la Defensa Pública y Ministerio Público en la realización de la prueba pericial en el proceso penal Peruano <p>Específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analizar doctrinaria y normativamente la regulación de la prueba pericial a fin de precisar si se vulnera el principio de igualdad de armas. • Analizar qué derechos del acusado vulnerados se vulneran tras el desbalance entre la Defensa Pública y Ministerio Público respecto a la realización de peritajes científico forenses. 	<p>Variable Independiente:</p> <p>Desbalance entre la Defensa Pública y el Ministerio Público.</p> <p>El acceso a la prueba pericial en el proceso penal Peruano.</p> <p>Variable Dependiente:</p> <p>Vulneración al principio de igualdad de armas.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Analizar doctrinariamente la realización de la prueba pericial entre la Defensa Pública y Ministerio Público. • Precisar el/los tipos de pericias que la defensa pública debería tener el mismo acceso que el Ministerio Público. 	
--	--	--	--

Cuadro 4. Matriz de consistencia lógica.

Fuente: Elaborado por José Arturo García Moncada

MATRIZ DE CONSISTENCIA METODOLÓGICA

TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN	POBLACIÓN Y MUESTRA	INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN	CRITERIOS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD
Descriptiva explicativa Diseño No Experimental	5 encuestados	Encuesta	Validación por consulta de expertos. Método de Alfa de Crombach

Cuadro 5. Matriz de consistencia metodológica.

Fuente: Elaborado por José Arturo García Moncada

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN

Yo, DIAZ MURO JOSE ANTONIO con DNI N° 41384897
Derecho Penal (Cuerpos penales) docente universitario magister en: Abogado
 ANR/COP de profesión Abogado Desempeñándome
 actualmente en Fiscalía Penal

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación los instrumentos:

Guía de Pautas y Cuestionario

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones.

Guía de Pautas Para Jóvenes Universitarios de la UCV-Piura	DEFICIENTE	ACEPTABLE	BUENO	MUY BUENO	EXCELENTE
1. Claridad					X
2. Objetividad					X
3. Actualidad					X
4. Organización					X
5. Suficiencia					X
6. Intencionalidad					X
7. Consistencia					X
8. Coherencia					X
9. Metodología					X

En señal de conformidad firmo la presente.

Piura de 09/10 De 2018.

[Firma]
 DNI N° 41384897
 Especialidad: Penal
 E-mail: jdiazmuro@hotmail.com

FICHA DE VALIDACIÓN

Indicadores	Criterios	Deficiente 0 – 20					Regular 21 – 40					Buena 41 – 60					Muy Buena 61 – 80					Excelente 81 – 100					OBSERV.
ASPECTOS DE VALIDACION		0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	96					
	Esta formulado con un lenguaje apropiado																										
1.Claridad	Esta expresado en conductas observables																										
2.Objetividad																											
3.Actualidad	Adecuado al enfoque teórico abordado en la investigación																										
4.Organización	Existe una organización lógica entre sus ítems																										

CUESTIONARIO

TITULO: “VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS ENTRE LA DEFENSA PÚBLICA Y EL MINISTERIO PÚBLICO RESPECTO A LA PRUEBA PERICIAL EN EL PROCESO PENAL PERUANO”

RESUMEN: Con la presente encuesta se pretende conocer si existe una vulneración al principio de igualdad de armas entre la defensa pública y el Ministerio Público respecto a la prueba pericial en el proceso penal peruano producto de un desbalance normativo y funcional, que conlleva a la posterior vulneración de derechos fundamentales.

Encuesta va dirigida a operadores del derecho en especial, los conocedores en materia Penal.

1. ¿Cree usted que existe vulneración al principio de Igualdad de Armas entre la defensa pública y el Ministerio Público en la realización de la prueba pericial en el proceso penal peruano? ¿En qué aspectos?

2. ¿Considera que existe vulneración a los derechos fundamentales durante el procedimiento de la prueba pericial por parte de la defensa pública?

- a) Si
b) No

3. De ser afirmativa su respuesta ¿Qué tipo de pericias considera que el Estado debería otorgar a la defensa pública a fin de que exista igualdad de armas?

4. ¿Qué derechos fundamentales considera son vulnerados a la parte acusada producto de la trasgresión al principio de igualdad de armas entre la defensa pública y el Ministerio Público?

_____.

5. ¿Conoce usted el Decreto Legislativo N° 1407, que fortalece el servicio de la Defensa pública?

- a) Si
- b) No

6. El Artículo N° 05 en su inciso B del decreto legislativo antes mencionado establece; “(...) *Brindar asistencia técnica pericial forense y de trabajo social a las/los defensoras/es públicas/os, para el ejercicio de la defensa*” ¿Crees que dicha medida es suficiente para evitar se genere una vulneración al principio de igualdad de armas entre la defensa pública y el Ministerio Público?

_____.

7. Con respecto a la normativa penal peruana ¿Qué propondría usted a fin de conseguir un balance entre la defensa pública y el Ministerio Público?

_____.

NOTA: El presente cuestionario será publicado como parte de los instrumentos de recolección de datos de la Tesis.

¿EL ENCUESTADO AUTORIZA LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE ENCUESTA?:

SI ☐ NO ☐

FIRMA DEL ENCUESTADO

Feedback Studio - Google Chrome
 evturnitin.com/app/carta/es/?lang=es&co=11726346568&u=1038722693&s=1

feedback studio

Tesis Septiembre Moncada 3

Resumen de coincidencias

28 %

28

1 Entregado a Universidad... 7 %
 Trabajo de emulación

2 repositorio.unilibrepe... 4 %
 Emulación de emulador

3 Entregado a Universidad... 1 %
 Trabajo de emulación

4 Entregado a UNILIBRE 1 %
 Trabajo de emulación

5 Entregado a Universidad... 1 %
 Trabajo de emulación

6 repositorio.unilibrepe... 1 %
 Trabajo de emulación

7 Entregado a Pontificia... 1 %
 Trabajo de emulación

8 www.mpin.gob.pe 1 %
 Fuente de Internet

9 es.scribd.com 1 %
 Fuente de Internet

Text-only Report High Resolution

Página: 1 de 51 Número de palabras: 15061

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO

“Vulneración al principio de igualdad de armas entre la Defensa Pública y el Ministerio Público respecto a la prueba pericial en el proceso penal Peruano”

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE

ABOGADO

AUTOR:

Br. José Arturo García Moncada (ORCID: 0000-0002-5404-4880)

ASESORA:

Abg. Angella Inés Pingo Morej (ORCID: 0000-001-9657-118X)

Abg. Leonel Villalta Urbina (ORCID: 0000-0002-2624-7592)



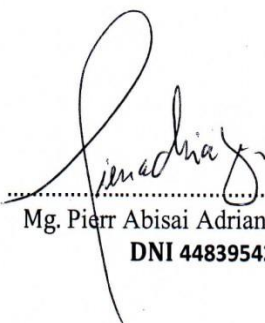
Adrianzen Roman
Pierr A. Adrianzen Román
 ABOGADO
 ICAP. N° 2751

Yo, Pierr Abisai Adrianzén Román, **MAGISTER EN DERECHO PÚBLICO**, identificado con documento de identidad N° **44839542**, docente de la Facultad de Derecho y Escuela Profesional de Derecho de la Universidad César Vallejo Piura, revisor de la tesis titulada:

“VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS ENTRE LA DEFENSA PÚBLICA Y EL MINISTERIO PÚBLICO RESPECTO A LA PRUEBA PERICIAL EN EL PROCESO PENAL PERUANO” del estudiante **GARCIA MONCADA JOSE ARTURO** constato que la investigación tiene un índice de similitud de 28% verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin.

El suscrito analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

Piura 16 de Setiembre 2019


.....
Mg. Pierr Abisai Adrianzén Román
DNI 44839542

Elaboró	Dirección de Investigación	Revisó	Responsable del SGC	Aprobó	Vicerrectorado de Investigación
---------	----------------------------	--------	---------------------	--------	---------------------------------



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI)
"César Acuña Peralta"

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DE LAS TESIS

1. DATOS PERSONALES

Apellidos y Nombres: **GARCIA MONCADA JOSE ARTURO**
D.N.I. : 70001447
Domicilio : Av. Pardo y Aliaga N° 403 – Urbanización. Miraflores
Teléfono : Fijo: 073-343844 Móvil: 942482172
E-mail : josezs1222@gmail.com

2. IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS

Modalidad:

☒ Tesis de Pregrado

Facultad : DERECHO.
Escuela : DERECHO
Carrera : DERECHO
Título : ABOGADO

☐ Tesis de Post Grado

☐ Maestría

Grado :
Mención :

☐ Doctorado

3. DATOS DE LA TESIS

Autor Apellidos y Nombres:

GARCIA MONCADA JOSE ARTURO

Título Trabajo de suficiencia profesional:

**"VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS ENTRE LA
DEFENSA PÚBLICA Y EL MINISTERIO PÚBLICO RESPECTO A LA
PRUEBA PERICIAL EN EL PROCESO PENAL PERUANO"**

Año de publicación : 2019

4. AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE LA TESIS EN VERSIÓN ELECTRÓNICA:

A través del presente documento,

Si autorizo a publicar en texto completo mi tesis.

No autorizo a publicar en texto completo mi tesis.



Firma :

Fecha : 16 de setiembre del 2019



Yo, **GARCIA MONCADA JOSE ARTURO** identificado con DNI N° 70001447 egresado de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad César Vallejo, autorizo (X), No autorizo () la divulgación y comunicación pública de mi trabajo de investigación titulado **“VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS ENTRE LA DEFENSA PÚBLICA Y EL MINISTERIO PÚBLICO RESPECTO A LA PRUEBA PERICIAL EN EL PROCESO PENAL PERUANO.”**; en el Repositorio Institucional de la UCV (<http://repositorio.ucv.edu.pe/>), según lo estipulado en el Decreto Legislativo 822, Ley sobre Derecho de Autor, Art. 23 y Art. 33

Fundamentación en caso de no autorización:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



FIRMA

DNI: 70001447

Piura, 16 de Setiembre de 2019



Elaboró	Dirección de Investigación	Revisó	Responsable del SGC	Aprobó	Vicerrectorado de Investigación
---------	----------------------------	--------	---------------------	--------	---------------------------------



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN**

**CONSTE POR EL PRESENTE EL VISTO BUENO QUE OTORGA EL ENCARGADO DE
INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA DE DERECHO**

A LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN QUE PRESENTA:

GARCIA MONCADA JOSE ARTURO

INFORME TITULADO:

**“VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS ENTRE LA DEFENSA
PÚBLICA Y EL MINISTERIO PÚBLICO RESPECTO A LA PRUEBA PERICIAL EN EL
PROCESO PENAL PERUANO”**

PARA OBTENER EL GRADO O TÍTULO DE:

ABOGADO

SUSTENTADO EN FECHA: 16 de Setiembre 2019

NOTA O MENCIÓN: **11- ONCE**



Mg. Pierr Abisai Adrianzen Román
DNI 44839542

